

## 43.<sup>a</sup> SESION ORDINARIA. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1913

PRESIDENCIA DEL DR. VICTORINO DE LA PLAZA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

Observación del señor Senador Olacoechea y Aleorta referente á la solicitud de las **corporaciones médicas é institutos científicos**.

II.—Proyecto, en revisión, sobre **casas federales** en las ciudades del Rosario de Santa Fe, Bahía Blanca y La Plata. Se aprueba sobre tablas.

III.—Se aprueba una moción del señor Senador Villanueva para tratar el proyecto autorizando la compra de una **casa** para la **legación argentina en Wáshington**.

IV.—Continúa la consideración del proyecto de **Caja de Jubilaciones y Pensiones** para los empleados ferroviarios.

V.—Se aprueba el proyecto á que se refiere el **número III**.

VI.—Continúa la consideración del proyecto mencionado en el **número IV**.

Señores senadores

—

Albarracín  
Carbó  
Crotto  
Dávila  
Del Valle  
Echagüe  
Esteves  
Güemes  
Irigoyen  
Iturraspe  
Maciá  
Malbrán  
Olacoechea y Aleorta  
Ovejero  
Posse  
Terán  
Villanueva  
Virasoro

En Buenos Aires, á los seis días del mes de Septiembre de mil novecientos trece, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores Senadores al margen consignados, con inasistencia de los señores Senadores Castañeda Vega, Civit, Del Pino, Garramuño, González, Guñazú, Lubarry, Mendoza y Ugarte con aviso, y Peña con licencia, dice el

presentes. Se va á dar lectura del acta de la anterior.

—Se lee y aprueba.

—Ocupa su banca el señor Ministro de Obras Públicas, doctor Carlos Meyer Pellegrini.

### I

**Sr. Presidente**—Se va á dar cuenta de los asuntos entrados.

Se lee:

—María Salas de Britos del Pino solicita pensión militar.

—A la Comisión de Guerra.

**Sr. Presidente** — Está abierta la sesión con diez y siete señores Senadores

—Jacob Larrain, en representación de Carolina Ossa de Baz é hija, solicita pensión civil.

—A la de Peticiones.

—La Sociedad Rural de Curuzú-Cuatíá, solicita el favorable despacho del pedido de concesión para instalar un frigorífico modelo en la Provincia de Corrientes, presentado por el señor Alberto J. Escalada.

—A sus antecedentes.

—Rosa Petrona Sarmiento solicita acumulación de pensión militar.

—A la de Guerra.

—La Sociedad Italiana de Tiro de Villa Devoto solicita un premio.

—A la de Peticiones.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1913.

*Al señor Presidente del honorable Senado:*

La honorable Cámara, que tengo el honor de presidir, ha sancionado, en sesión de la fecha, el adjunto proyecto de ley, que paso en revisión de la honorable Cámara de Senadores, por el que se manda hacer estudios para la construcción de casas Federales en el Rosario de Santa Fe, Bahía Blanca y La Plata, destinadas á concentrar todas las dependencias y oficinas nacionales que funcionan en dichas ciudades.

Me es grato saludar al señor Presidente con mi consideración más distinguida.

R. M. FRAGA

*D. Zambrano (hijo)*

**Sr. Irigoyen**—Pido la palabra.

Hago moción para que, después que se lean los asuntos entrados, se trate sobre tablas el proyecto á que se refiere esta nota.

—Apoyada.

**Sr. Presidente**—Estando apoyada la moción del señor Senador, se va á votar.

—Se vota y resulta afirmativa

—Se lee:

—Las Corporaciones Médicas é Institutos Científicos solicitan, del honorable Congreso, la reglamentación del ejercicio de la medicina.

**Sr. Olacoea y Alcorta**—Pido la palabra.

Es para manifestar, señor Presidente, á propósito de la solicitud que acaba de leerse, que en la Comisión existe un proyecto reglamentando el ejercicio de la medicina, presentado por los doctores Maciá y Malbrán; y que, si aun no se ha expedido, es porque estaba ocupada con el asunto de los ferroviarios. Quería hacer esta observación y manifestar que una vez terminado este asunto, se ocupará de este proyecto, así como de otros que esperan estudio de la Comisión.

—Se lee:

—Varios empleados ferroviarios hacen observaciones á la nota, presentada en la última sesión por otros empleados de ferrocarriles.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Podría leerse.

—Se lee:

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1913.

*Al honorable Senado de la Nación:*

Los abajo firmados, empleados del F. C. Pacífico, exponen, respetuosamente, al honorable Senado de la Nación:

Que hemos sido desagradablemente sorprendidos con la presentación hecha por un núcleo de empleados de esta empresa, contra la Ley de Jubilaciones y Pensiones que, actualmente, discute el honorable Senado, cuya nota fué leída en la sesión celebrada el día 4 del corriente y ha merecido comentarios favorables del diario «La Prensa» del día de hoy.

Denunciamos formalmente, ante el honorable Senado de la Nación, que en este asunto de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, se está haciendo uso de recursos ilícitos para que la idea fracase.

Hace días se hizo circular, para la firma, una nota dirigida al honorable Senado, pidiendo que la ley fuera sancionada en términos mucho más liberales que en los que se la está encajando y muchísimos nos hemos negado á subscribirla convencidos de que lo que se pedía era demasiado, y suficiente para el fracaso de la ley en la práctica.

Pero ahora viene lo grave; la tal nota fué un engaño para conseguir las firmas; obteniendo el objeto que se perseguía, las firmas han sido agregadas á la nota que se leyó en el honorable Senado.

La comprobación de lo que antecede puede hacerlo, si lo desea el honorable Senado, ila-

mando á su seno á los firmantes para que cada uno lea la nota presentada y diga si para éso es que se los pidió su firma. Además sería necesario comprobar rigurosamente si todos los firmantes son empleados del Ferrocarril Pacífico.

Conceptuamos que ha sido en este caso burrada la buena fe del honorable Senado de la Nación. Los fundamentos de la nota presentada no merecen el más ligero análisis. En lo que se refiere á los préstamos para adquirir viviendas, idéntica facilidad ofrecen otras empresas y á ninguno de los empleados de aquélla se les ha ocurrido que tal cuestión tenga algo que ver con la Ley de Jubilaciones y Pensiones.

La empresa, lo que hace es prestarnos el dinero á 10 años de plazo y á 4 % de interés, lo que equivale á que el empleado se haga propietario al fin de 10 años, pagando mensualmente un poco más de lo que hubiera pagado alquilando casa. Esta es la facilidad que nos acuerda la empresa y la estimamos en lo que realmente vale, estando muy agradecidos por ello; pero de ahí á suponer que vale más esa facilidad que asegurar nuestra vejez y el porvenir de nuestros hogares, existe una diferencia tan considerable, que no alcanzamos á comprender cómo haya cerebros que sustenten semejante idea.

En nuestra modesta opinión, nada tiene que hacer un asunto con otro y en lo único que se relacionan, es que ambos tienden á asegurar la estabilidad del empleado ferroviario y á convertir esta rama de la industria en una profesión para el personal que se dedique á ella.

En la nota pasada al honorable Senado se afirma que los empleados que prestigian la nueva ley carecen de personería y que ninguno los ha investido con los poderes necesarios para abrogarse la representación del personal. Esto es incierto. Cuando se inició la idea el año pasado, todos los empleados de las distintas empresas ferroviarias, celebramos varias asambleas en las oficinas de la Administración de este ferrocarril, cedidas por quien podía hacerlo, y en ellas, fueron nombrados los empleados que, desde entonces, dirigen los trabajos.

Efectivamente, desde un principio hubo un núcleo de empleados nuevos—de uno á tres años de antigüedad en la empresa—que se manifestaron contrarios al proyecto de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, pero éstos, además de ser una ínfima minoría, con las ideas que sustentan demuestran que en ellos el sentimiento más desarrollado es el egoísmo, que no les permite ver el mal que á sí propio se hacen para su vejez y para la suerte de sus familias. Suponemos que á dicho círculo pertenece la nota enviada al honorable Senado, á favor de la cual se consiguieron firmas en la forma que hemos indicado.

E. García Balderrini—Leopoldo Hernández — Santiago Lago.—Signen las firmas.

## II

—Se lee:

### PROYECTO DE LEY

Al Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.º El Poder Ejecutivo mandará estudiar la construcción de casas federales en las ciudades del Rosario de Santa Fe, Bahía Blanca y La Plata, destinadas á concentrar todas las oficinas nacionales que funcionan en dichas ciudades, con excepción de la Aduana.

Art. 2.º Los planos y presupuestos definitivos de las casas federales serán presentados al honorable Congreso de la Nación, á más tardar, en Junio de 1914.

Art. 3.º Autorízase al Poder Ejecutivo para celebrar los arreglos necesarios, con las autoridades de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, á fin de obtener los terrenos adecuados para las construcciones mencionadas, si no los poseyera la Nación.

Art. 4.º Destinase hasta la suma de cinco mil pesos moneda nacional, para los estudios respectivos, que serán pagados de rentas generales, imputándose á la presente ley.

Art. 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente—**Está en discusión en general.

—Se aprueba el proyecto en general y en particular.

## III

**Sr. Villanueva—**Pido la palabra.

Voy á hacer moción para que se trate sobre tablas el asunto que figura en la orden del día, N.º 21, que se refiere á la adquisición de una casa para la Legación en Washington. Los motivos de la conveniencia de esta operación están expresados en el mensaje con que el Poder Ejecutivo remitió el proyecto, y ellos podrán ser ampliados por el señor miembro informante de la Comisión; á mí sólo me corresponde dar la razón de urgencia, que justifica mi moción, y es que el contrato firmado *ad referendum* vence el 30 de Septiembre y que no se sabe si la señora propietaria de la casa querrá prorrogarlo.

Como la discusión del asunto á la consideración del Senado amenaza prolongarse por algunos días y faltan pocos

para terminar las sesiones ordinarias, sería conveniente que se tratara hoy el proyecto á que me refiero, para que pasara inmediatamente á la honorable Cámara de Diputados y ésta tuviera tiempo de despacharlo.

—Apoyado.

**Sr. Presidente**—Debo hacer presente que la Secretaría me informa haber recibido aviso del señor Ministro de Relaciones Exteriores de que desearía estar presente cuando se considere este asunto.

**Sr. Villanueva**—El señor Ministro de Relaciones Exteriores concurrió á la sesión anterior en la creencia de que se iba á tratar, y le indiqué la conveniencia de hacer la moción que acabo de formular; pero no se hizo, entre otras razones, por no tener el señor miembro informante todos los antecedentes.

Podría pasarse aviso al señor Ministro y, cuando él llegue, suspender la consideración del asunto en discusión para tratar el referente á la adquisición de esta propiedad.

—Apoyada.

**Sr. Presidente**—Se va á votar la moción del señor Senador por Mendoza

—Se vota y resulta afirmativa.

#### IV

**Sr. Presidente** — Se va á continuar con la orden del día.

—Se lee:

Art. 12. Podrán acogerse á los beneficios y obligaciones de la presente ley los empleados y obreros de las empresas ferroviarias de jurisdicción provincial cuyos representantes solicitaren con intervención de los respectivos gobiernos locales, siempre que las empresas, los empleados y dichos gobiernos hagan los aportes y se sujeten á las condiciones fijadas en esta ley.

—Se vota y aprueba.

**Sr. Maciá**—Pido la palabra.

Antes de pasar al artículo que sería el final de la ley, estableciendo que el

Poder Ejecutivo la reglamentará, me voy á permitir presentar otro subsanando la principal dificultad, por la cual yo me consideraba, en cierto modo, inhabilitado para votar, en general, el proyecto de la Comisión, por la falta de esa prescripción, habiendo después pensado que en particular podría subsanarse.

Pido al señor Secretario que lo lea.

—Se lee:

Los empleados y obreros que voluntariamente abandonaran el servicio de modo que se interrumpa y perturbe la regularidad de la marcha de los ferrocarriles, serán considerados como separados del servicio, y deberán ser substituidos, perdiendo todo el derecho que hubieren adquirido á la jubilación, pensión ó retiro á que esta ley se refiere y á los aportes que hubieren hecho, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

Los empleados y obreros afectados por esta disposición tendrán derecho á requerir ante la Comisión creada por el artículo 8.º, la que tendrá facultad de suspender total ó parcialmente la sanción establecida en el párrafo anterior, si el abandono del servicio hubiera sido producido por fuerza mayor ó causa justificada á juicio de la misma.

**Sr. Maciá**—Pido la palabra.

Para fundar este artículo, no tendría sino reproducir las consideraciones que hice en la discusión en general. Dije entonces, que á este proyecto le faltaba la correspondiente compensación, es decir, la prescripción que haga que el servicio de los ferrocarriles sea permanente, garantiendo á los empleados su seguridad y garantiendo á las empresas y al público la regularidad del servicio. Si se piden sacrificios á los cargadores, á los productores y á las empresas, en obsequio de los empleados, esos sacrificios deben ser compensados, y no pueden serlo, sino por la garantía de un buen servicio. Si á los empleados se les acuerda el simple ejercicio de un derecho, ya que así quiere considerarse el de la jubilación y pensión, hay que aceptar que un derecho implica una obligación, y en este caso la obligación es la del servicio regular y continuado.

Hay que pensar que, si bien el proyecto afecta directamente á las empresas y á los obreros, que son los más directamente expuestos á choques y

conflictos, interesa también á los productores y á los cargadores que, extraños á los conflictos entre el capital y el trabajo, son los principales damnificados por las consecuencias de esos conflictos.

Por consiguiente, puesto que al empleado se le da la justa compensación por la continuidad, la seriedad y la regularidad de sus servicios, es justo que los empleados den á los productores y cargadores y las mismas seguridades. En esas razones fundo el artículo que someto á la discusión y al juicio del honorable Senado.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—¿Qué opina el Poder Ejecutivo sobre este artículo?

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—El Poder Ejecutivo...

**Sr. Presidente**—No se ha puesto en discusión todavía el artículo, porque no ha sido apoyado.

**Varios señores Senadores**—Apoyado.

**Sr. Presidente**—Estando apoyado, está en discusión. Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—Diré simplemente que el Poder Ejecutivo apoya ese artículo y que, si de parte de algunos señores Senadores fuera objetado, no tendría inconveniente alguno en dar las razones que motivan su adhesión á la proposición que envuelve.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Pido la palabra.

El artículo propuesto por el señor Senador por Entre Ríos es de una importancia capital, aunque á simple vista no lo parezca. Por esta razón, señor Presidente, yo deseaba saber la opinión que este agregado le merecía al Poder Ejecutivo, representado en este momento por el señor Ministro de Obras Públicas. El Poder Ejecutivo, debiera, en mi opinión, haber dado las razones fundamentales, que no ha dado el señor Senador por Entre Ríos, para justificar la incorporación de este artículo á la ley de pensiones y jubilaciones de los obreros ferroviarios; pero el señor Ministro se ha limitado á manifestar que dará las razones *á posteriori*, en la suposición de que la honorable Cámara estaría de acuerdo con este artículo.

Yo debo manifestar mi disentiendo, mi profundo disentiendo con él, porque creo que la aceptación del principio que envuelve, entraña un gravísimo peligro para los derechos del pueblo trabajador de nuestra República. En consecuencia, debo fundar mi voto en contra de este artículo con alguna extensión, á riesgo de cometer algunas digresiones que parezcan inoportunas; pero discúlpeme el señor Senador por Entre Ríos este pequeño pecado, este pecado lo venial, en aras de los derechos que quiero defender en este instante.

**Sr. Maciá**—Parece que el señor Senador me toma á mí por el Reglamento, y el Reglamento es el Reglamento, y no yo.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—El Reglamento, que algunas veces suele encarnar el señor Senador...

**Sr. Maciá**—Suelo recordar, no encarnar.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—... no prohibo de ninguna manera que yo funde mi voto en forma conveniente.

**Sr. Maciá**—Entonces, podría haberse ahorrado la referencia que ha hecho á mi persona.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—La proposición del señor Senador por Entre Ríos, que apoya el señor Ministro de Obras Públicas, priva de su puesto y del beneficio de la jubilación á los empleados y obreros que voluntariamente abandonan sus servicios ó los prestaren del modo que se interrumpa ó perturbe la continuidad ó regularidad de la marcha de los ferrocarriles. Bien, pues; quiere decir, señor Presidente, que, aunque el artículo propuesto no lo diga, él tiende á prohibir á los obreros y empleados de los ferrocarriles de nuestro país el ejercicio de la huelga, que es un derecho legítimo consagrado por nuestra Constitución.

Ha sucedido con la redacción de este artículo, á mi juicio, lo que en una discusión suele pasar á menudo, ó sea que para evitar una palabra mal sonante, suele recurrirse á la perifrasis. En este caso, el artículo no habla para nada, absolutamente para nada, de la prohibición del derecho de huelga; pero quita el beneficio de la pensión y destituye al

empleado que abandone voluntariamente ó que suspenda el servicio ferroviario. Tenemos, en consecuencia, señor Presidente, que el agregado propuesto por el señor Senador por Entre Ríos, tiende á prohibir á los obreros y empleados de las empresas ferroviarias este derecho sagrado, este derecho legítimo que está consagrado por todos los pueblos libres de nuestra época histórica.

Yo combatí desde luego, señor Presidente, en la discusión en general, la idea, que ya fué entonces insinuada, de dar á las empresas, en compensación de sus probables aportes, el derecho de suprimir á los obreros de ellas dependientes, el recurso de las huelgas, y dije entonces que tendría ocasión de referirme detenidamente á este punto en la discusión en particular.

Sostuve, ante todo, que una disposición de esta índole era impertinente, en el sentido de que no tenía cabida en una ley de jubilaciones, de pensiones ó de retiros, y agregué que si el señor Ministro de Obras Públicas, en representación del Poder Ejecutivo, pensaba que era necesario en nuestro país limitar y reglamentar el ejercicio del derecho de huelga de los empleados y obreros de los servicios públicos, no era este el momento oportuno y que, de pensarlo así, debía de preocuparse de la reglamentación del contrato del trabajo entre estos obreros y las empresas. Tuve ocasión, entonces, señor Presidente, de exponer los fundamentos de esta opinión mía, y ahora debo darlos con mayor extensión, para demostrar á la honorable Cámara como es improcedente esta disposición que propone el señor Senador por Entre Ríos.

La ley de pensiones que estamos discutiendo no es, señor Presidente, una ley de beneficencia, ni una ley de compensaciones para las empresas ferroviarias, sino simplemente una ley que obedece á motivos de orden general y de orden público, en cuanto tiende á mejorar, porque así es necesario para el buen servicio, las condiciones de trabajo y el bienestar en la vejez de los empleados y obreros de dichas empresas.

Siendo esto así, señor Presidente, yo no me explico cómo puede introducirse una enmienda que tenga por objeto re-

glamentar las condiciones del trabajo, que no están reglamentadas todavía en nuestro país en una forma legal, en una forma oficial. Habría sido el caso, señor Presidente, de que el Poder Ejecutivo se preocupara hace tiempo de esta reglamentación en interés general, en beneficio del país, de los obreros y de las mismas empresas, para asegurar el tráfico, para mejorar los servicios ferroviarios y para adoptar las medidas necesarias al bienestar de los empleados y obreros.

En una reglamentación de esta clase, bien sea de carácter oficial ó de carácter particular, de admitirse el contrato colectivo de trabajo, hubiera cabido, no una disposición de esta naturaleza, sino otra semejante que tuviera por objeto el ejercicio del derecho de huelga, sujetándolo previamente á la resolución de un tribunal de conciliación ó de arbitraje. Ahora resulta, de admitirse el artículo que indica el señor Senador por Entre Ríos, que al reconocérseles á los empleados y obreros ferroviarios el derecho á una pensión, que pagarán en parte de su propio peculio, el Estado viene á retirarles un derecho establecido en la ley fundamental, de una manera implícita, pero concreta y manifiesta. ¡Esto es intolerable, esto no puede justificarse de ninguna manera; esto no debe admitirse por la honorable Cámara, porque, de lo contrario, vendríamos á colocar en una situación de superioridad y absorción á las empresas con relación á sus empleados! ¡Ellas vendrían á tener la parte del león, y los obreros vendrían á ser seguramente sus víctimas!

Hemos dicho, los que impugnamos la enmienda que propuso el señor Senador por Entre Ríos, al artículo 1.º, que la Caja establecida por esta ley dejaba de ser de carácter nacional, para convertirse en una institución particular. Los que continuamos pensando de esta manera, sostenemos que, entonces, no corresponde la ingerencia del Estado, la intervención de nuestro Gobierno en favor de las empresas y de los cargadores, quienes no han pedido la sanción de una ley de este carácter, á pesar de que la honorable Cámara, por una resolución anterior, resolvió que éstos contribuyan á la formación de la Caja.

El señor Senador por Entre Ríos entendía que esta ley beneficiaba á los cargadores y que, en consecuencia, ella tenía la obligación de asegurarles la continuidad de los servicios. Sostengo yo, en cambio, que esta ley beneficia á las empresas y á los obreros y empleados, y que los cargadores no han tenido arte ni parte en su origen, en su tramitación y en su sanción. De consiguiente, deben estar eliminados de la discusión en este momento. Esta cuestión del servicio público, de la continuidad de los servicios por medio de los ferrocarriles, es una cuestión que, ciertamente, interesa al país; pero no debe discutirse sobre ella de una manera incidental, como estamos haciendo en este caso: debe promoverse la discusión en el momento oportuno si se piensa que ha llegado ya la ocasión de legislar sobre esta materia.

Entretanto, yo debo velar aquí por el derecho de los obreros de nuestro país para que por medio de la asociación y de la coalición, si es necesario, puedan obtener aquellas reivindicaciones que no han conseguido por la pasividad del Gobierno de la República. Deberemos, entonces, discutir con franqueza la legitimidad ó ilegitimidad del ejercicio de la huelga por parte de los empleados y obreros ferroviarios. Yo sostengo que en la circunstancia actual este derecho no puede ser restringido en ninguna forma. El derecho de coalición como el derecho de asociación, está asegurado, está reconocido por la carta fundamental de la República. Si la Constitución establece la libertad de trabajo, esa disposición lleva consigo, de una manera necesaria, el derecho para todo habitante del país de no trabajar, cuando así le convenga, por razones físicas ó por razones sociales, bien sea por un motivo particular, bien sea por un motivo de carácter general.

En las condiciones actuales, los Poderes Públicos no tienen facultad de ningún género para limitar y reglamentar el ejercicio de este derecho, y esta es la opinión nacional; de tal manera manifestada que ni aún en ciertos momentos críticos, en instantes en que hubo una especie de pavor colectivo, cuando el honorable Congreso sancionó la

ley de defensa social, no se pensó en desconocer el ejercicio del derecho de huelga de los obreros de la República. Pero resulta, señor Presidente, que nosotros, en una ley de amparo, en una ley de cooperación social, de protección á los obreros pretendemos venir ahora á establecer una disposición draconiana, que va más lejos que la ignominiosa ley de defensa social, convirtiendo así la ley de retiros en una verdadera ley marcial.

Yo me explico que el señor Ministro de Obras Públicas, que tuvo tanta parte en el génesis y en la sanción de la ley de defensa social, sostenga la inclusión en la ley de retiros de un artículo que tiende á limitar ó negar á los obreros el ejercicio de la huelga; pero no me explico que el señor Senador por Entre Ríos, que combatió *in partibus*, esta misma ley, venga á proponerlo en estos momentos.

Bien, señor Presidente; en las circunstancias actuales, el honorable Congreso, no debe votar una ley de este carácter, que perjudicará el desarrollo normal de un importantísimo gremio proletario de nuestro país. Si se quiere, en verdad, el mejoramiento de este gremio, no debe ponerse trabas de ninguna especie para su desarrollo económico: al contrario, se deberá procurar los medios para que se desarrolle en una forma legal, en beneficio del país, en beneficio de los obreros, en una palabra, en beneficio de las empresas mismas.

Este artículo, señor Presidente, verdaderamente inconstitucional, crea una completa desigualdad entre las empresas y los obreros. Está la desigualdad en el hecho de retirarles el derecho á la pensión á los empleados que abandonen voluntariamente el servicio; en amenazarles con privarles de un derecho adquirido, establecido por la ley, y que va á ser sostenido con una parte de su peculio, si en algún momento llegan á recurrir á la huelga para reclamar ciertas mejoras en el trabajo. En cambio, señor Presidente, para las empresas no hay ninguna disposición punitiva para el caso de que ejerciten el *lock-out*, es decir, que expulsen de sus talleres ó suspendan en sus servicios á los empleados ú obreros, pues la ley no establece para ellas ninguna obligación de reparar los

daños y perjuicios que semejante hecho pueda ocasionarles.

—Ocupa su banca el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Ernesto Bosch.

Yo no sé, señor Presidente, si estando presente el señor Ministro de Relaciones Exteriores, corresponde que continúe con el uso de la palabra.

**Sr. Presidente**—Si el señor Senador no tuviera inconveniente en interrumpir por un momento su exposición...

**Sr. Del Valle Iberlucea**—No, señor, no tengo inconveniente.

## V

**Sr. Presidente**—Se va á dar lectura del asunto que se ha resuelto tratar con la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

—Se lee:

*Honorable Senado:*

La Comisión de Hacienda ha estudiado el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo autorizándole para adquirir una casa y mobiliario para residencia de la República Argentina en los Estados Unidos de América, y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de Comisión, Agosto 27 de 1913.

*L. Güemes—J. Posse.—E. Civit.*

Buenos Aires, Junio 7 de 1913.

*Al honorable Congreso de la Nación:*

El Poder Ejecutivo tiene el propósito de dotar con casas propias á las Legaciones que, por razones especiales, requieran estar instaladas en esas condiciones.

Como la Legación Argentina en los Estados Unidos de América se halla en ese caso, el Poder Ejecutivo, aprovechando el oportuno ofrecimiento de una finca apropiada para tal destino por su comodidad, amplitud, ubicación y mobiliario, autorizó al señor Ministro ante esa nación á firmar, ad referendum, el correspondiente contrato de compraventa.

La adquisición se realizaría en términos particularmente favorables y sin aumentar en mo-

do sensible los gastos de la Nación, como se manifiesta en la nota adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El costo de la casa, incluido el mobiliario, representa una erogación de trescientos mil dólares, pagaderos en diez cuotas anuales con intereses no mayores del 4 por ciento anual.

Para finalizar esta operación, el Poder Ejecutivo ocurre á Vuestra Honorabilidad en demanda de la autorización que requiere el proyecto de ley acompañado y cuya preferente consideración se justificaría con sólo decir que antes del 30 de Septiembre próximo debe el Poder Ejecutivo ratificar el contrato de la referencia.

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.

ROQUE SÁENZ PEÑA.

A. PIÑERO.

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de*

## LEY:

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para adquirir la finca y mobiliario que le han sido ofrecidos en venta en la ciudad de Washington con destino á la Legación Argentina en los Estados Unidos de América, por la suma de trescientos mil dólares ó sea (\$ oro 310.920) trescientos diez mil novecientos veinte pesos oro, pagadera en diez cuotas anuales con intereses no mayores del 4 % anual.

Art. 2.º Queda facultado el Poder Ejecutivo para aumentar las cuotas á que se refiere el artículo anterior, á fin de disminuir los plazos del pago.

Art. 3.º La primera cuota del gasto autorizado por la presente ley se pagará, con imputación á la misma, de rentas generales, y las siguientes se incluirán en los presupuestos de gastos de la Administración.

Art. 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

A. PIÑERO.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1913.

*Señor Ministro de Hacienda:*

S. E. el señor Presidente de la Nación, fiel á su propósito de instalar en casas propias á las legaciones que, por su importancia se hallen en el caso de ampliar su representación, de acuerdo con el medio en que deban actuar, autorizó al doctor Rómulo S. Naón, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina en los Estados Unidos de América, á firmar, ad referendum, el contrato de compraventa de una casa ofrecida para sede de la Legación Argentina en condiciones particularmente favorables.



Septiembre 6 de 1913

CAMARA DE SENADORES

43.ª sesión ordinaria

El edificio de la referencia reúne todas las exigencias requeridas; tanto por el lujo y amplitud de la construcción como por la inmejorable ubicación del mismo, así como por la suntuosidad de su mobiliario y aparente distribución de las salas y habitaciones.

El precio de la casa, incluido el mobiliario, es de trescientos mil dólares oro americano, pagaderos en diez cuotas de treinta mil dólares cada una, la primera de las cuales deberá hacerse efectiva en el acto de firmarse el contrato de compraventa y las restantes en nueve anualidades vencidas.

El Gobierno Argentino pagará, asimismo, por adelantado, y con cada una de dichas cuotas, el interés anual del 4 por ciento sobre todo el importe del saldo remanente que adeude; pero se reserva el derecho de cancelar su deuda en cualquier momento ó de pagar el importe de una ó más cuotas, antes de su respectivo vencimiento, si así lo estimare conveniente.

Por tratarse de una compra que no demandará inmediatas erogaciones de importancia para el erario y que beneficia grandemente á nuestra representación en la Gran República del Norte, tengo instrucciones del señor Presidente de la Nación para dirigirme á V. E. á objeto de que por su intermedio se envíe al Congreso el Mensaje respectivo para que pueda llevarse á cabo esta adquisición, haciendo presente á V. E. que el contrato ad-referéndum firmado por nuestro Representante Diplomático estipula que el Gobierno deberá ratificarlo antes del 30 de Septiembre del corriente año, quedando en caso contrario nulo y sin efecto.

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideración más distinguida.

ERNESTO BOSCH.

A. S. E. el Doctor Norberto Piñero, Ministro de Hacienda

Junio 7 de 1913.

Con el mensaje acordado, remítase al honorable Congreso de la Nación.

PIÑERO.

**Sr. Presidente**—Está en discusión en general.

**Sr. Güemes**—Pido la palabra.

El Poder Ejecutivo, con el propósito de dotar de casas propias á aquellas legaciones que por su importancia tienen mayor espectabilidad, autorizó al Ministro Argentino en los Estados Unidos á firmar un contrato ad-referéndum para la adquisición de una casa que le había sido ofrecida para la Legación en Washington. Ahora, se solicita la autorización del Congreso para llevar á cabo esta operación.

La mayor parte de nuestras legaciones se encuentran actualmente instala-

das en casas particulares alquiladas al efecto. Esto tiene muchos inconvenientes pues no siempre reúnen las condiciones requeridas para el objeto á que se las destina; á menudo son caras ó están mal ubicadas y hay que tomarlas mediante contratos, estando expuestos á tener que desalojarlas de un momento á otro, lo que ocasiona gastos y molestias al personal de las legaciones y á todas las personas que tienen que hacer directa ó indirectamente con ellas, además de exponer el mobiliario y el archivo á pérdidas ó deterioro que pueden ser muy perjudiciales.

A nadie escapan las ventajas que hay en que las legaciones estén establecidas en edificios propios. La legación en un país extraño es como la prolongación del Estado que representa, y el compatriota que llega á ese país la ve con cariño, se acostumbra á ella y la considera como un pedazo de su tierra, lo que contribuye á mantener en él siempre vivo el sentimiento de la nacionalidad. Las legaciones en casa propia infunden, sin duda, mayor respeto, son más estables y están en mejores condiciones para retribuir las atenciones que reciben de las autoridades del país en donde están acreditadas, de la sociedad y de los representantes de las otras naciones.

Es con este criterio que la comisión se ha avocado el estudio de este asunto.

La casa ofrecida consta de cuatro pisos y un subsuelo, y, según el Ministro Argentino en Washington, tiene todas las condiciones necesarias para instalar, con comodidad, todas las dependencias de la legación, como también para organizar la oficina para el patronato de los becados, una de informaciones generales, otra de adquisiciones, una biblioteca de la República, sin perjuicio de los salones y demás comodidades del piso destinado á las recepciones. La casa está ubicada en uno de los barrios de mayor importancia y distinción social; es hermosa, á juzgar por la fotografía, bien distribuida y construida según los planos y datos que la Comisión ha tenido á la vista, lo que significa que no demandará mayores gastos para su sostenimiento y conservación. Los muebles que la adornan, que también entran en la venta, parece que no dejan nada que desear. El precio de la finca, que

el Ministro ha hecho estimar por personas competentes, asciende, junto con el mobiliario completo, á trescientos mil dólares, ó sean trescientos diez mil novecientos veinte pesos oro, pagaderos en la siguiente forma: diez por ciento al firmar el contrato de compraventa y nueve cuotas, de diez por ciento, pagaderas en nueve anualidades vencidas con un interés de 4 %, por el saldo que se adeude.

El Gobierno podrá, si quiere, pagar mayor número de cuotas para amortizar la deuda lo más pronto posible. La Comisión, considerando que hay verdaderas ventajas morales, sociales, internacionales y económicas en la realización de este contrato, aconseja su aprobación inmediata, pues el treinta de este mes vence el plazo fijado para su ratificación.

He dicho.

**Sr. Presidente**—Está en discusión en general.

No haciéndose uso de la palabra, se va á votar.

—Se vota y aprueba en general y en particular.

**Sr. Presidente**—Queda sancionado el proyecto.

Puede continuar el señor Senador por la Capital con el uso de la palabra.

—Se retira el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

## VI

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Bien, señor Presidente. Iba diciendo que en vez de reglamentar en esta forma incidental el derecho de coalición de los obreros ferroviarios, correspondería que la honorable Cámara se preocupase en otra oportunidad de iniciar el contrato colectivo de trabajo entre ellos y las empresas, ya que por el momento no piensa, según parece, hacerlo el Ejecutivo. Esta es la forma adecuada para legislar sobre este punto de una manera inteligente, que responda á las circunstancias actuales. En todos los países está arribándose ahora á una reglamentación legal del trabajo, no solamente respecto de la industria privada, sino

igualmente acerca de los servicios públicos, y también en virtud de convenios colectivos entre patrones y obreros.

Hemos iniciado en nuestro país la reglamentación legal del trabajo que hoy está en sus principios, pero que, según manifestaciones que hemos podido notar durante este período ordinario en el honorable Congreso, llegará á desarrollarse más ó menos tarde, en una forma más ó menos completa. Entretanto, pudiera ser que conviniese á los intereses del país el libre desarrollo y el libre juego de aquellos sindicatos obreros, que por medio de relaciones leítas, pudieran llegar con los patrones ó con las empresas á establecer las normas y las condiciones del trabajo.

Durante algún tiempo se creyó que el ejercicio del derecho de coalición era perjudicial para los intereses generales de las industrias ó de la producción, así como también para los intereses particulares de los obreros. Estos últimos entendían, sin embargo, que estaban, en determinados casos, en la obligación de recurrir á este medio de lucha para conseguir su emancipación económica. Puede decirse que la historia de la emancipación obrera en el siglo XIX es la historia de las coaliciones.

No pensaban de esta manera los poderes públicos en Europa, que entendían deber salvaguardar los intereses de las industrias, contundiendo, con ellos, los intereses de la Nación, limitando el ejercicio del derecho de huelga y del derecho de asociación. Es así como en los principios de la revolución francesa, que declaró los derechos del hombre y del ciudadano, la burguesía limitó el derecho de coalición; es cierto que no sólo para los obreros, sino también para los patrones; pero, colocando en una situación inferior á los obreros, que eran castigados cuando recurrían á la huelga, de una manera mucho más severa que cuando los patrones celebraban entre sí combinaciones industriales. Esto, que ocurría durante la revolución en Francia, sucedió también en Inglaterra, porque debía ser necesariamente una de las consecuencias primeras del industrialismo, de este nuevo régimen económico que venía á establecerse en la sociedad europea.

Los diferentes gobiernos de Inglaterra prohibieron á los obreros el derecho de asociación, como así también el derecho de coalición, durante el primer tercio del siglo XIX; pero, bien pronto, privados de estos derechos, los obreros iniciaron intensas agitaciones, que tendían á reivindicar para sí estos derechos fundamentales, sin los cuales no puede existir un régimen normal de instituciones libres. Es así como, después de una grande y gloriosa lucha, el proletariado inglés, representado por las Trades Unions, vino á conseguir el pleno reconocimiento de estos derechos, que hoy también reconocen todas las naciones civilizadas.

La huelga no debe ser, en verdad, un medio normal de lucha, y así lo comprenden los obreros inteligentes, que recurren á este medio de una manera forzosa, cuando son llevados á él por las necesidades del momento. Acaso pueda decirse que hay cierta tendencia en el movimiento obrero que pregona la huelga como única solución, y no sólo la parcial, sino también la de carácter general.

Debo manifestar á la honorable Cámara, que los obreros dotados de una perfecta organización económica, piensan más bien que es indispensable buscar otros medios para conseguir sus reivindicaciones y que sólo como *último ratio*, debe aceptarse la huelga, que es un episodio de la guerra social. Pero en el mundo moderno, en las industrias privadas, como en los servicios públicos, llega un día en que no hay otro remedio que recurrir á la huelga, y, para este supuesto, la ley debe amparar por completo á los obreros, permitiéndoles que ejerciten sus derechos de reclamación en frente de los patrones. De otra manera, la organización política sería injusta y provocaría las iras de aquella enorme parte de la sociedad que, produciendo la fortuna social, apenas si tiene lo necesario para no morir de hambre.

Es por estas razones, señor Presidente, que en Inglaterra los gobiernos liberales decretaron en el siglo XIX las libertades de asociación y de coalición. Es por estas mismas razones que en la misma Francia, durante el segundo Im-

perio, bajo un gobierno despótico, se derogó, en 1864, la disposición del Código Penal que prohibía á los obreros el derecho de huelga, y por estas mismas razones, en 1884, se dictó la ley de los sindicatos, reconociendo á los obreros el derecho de asociación.

Debemos confesar que desde la sanción de la Constitución de 1853, nuestro país estaba más adelantado en esta materia, que los países de Europa, que Francia é Inglaterra, porque reconocimos este derecho fundamental de los hombres, de los obreros, el derecho de coalición y de asociación para conseguir la reducción de la jornada y el aumento de su salario. En verdad podría decirse que en esa época, no se habían producido en nuestro país aquellas manifestaciones del capitalismo que ahora están desarrollándose en forma plena y planteando en nuestra República iguales ó parecidas condiciones económicas que las existentes en las antiguas naciones de Europa; pero si esto es verdad, no debemos olvidar que en el desarrollo de este sistema debemos aprovechar de la experiencia de las viejas naciones y seguir los pasos de naciones como Francia é Inglaterra, y, por consiguiente, imitar las leyes de estos países, que han reconocido los derechos de asociación y de coalición para todos sus habitantes.

Y las huelgas, señor Presidente, cuando no existen aquellas condiciones legales y de libre contratación entre los sindicatos patronales y los obreros, que permitan dar una solución adecuada á las dificultades entre el trabajo y el capital, tienen que ser bien miradas, porque no producen los perjuicios que generalmente se cree.

En efecto, hace poco tiempo, en este mismo año, un distinguido economista, el señor Rist, publicó en la «Revue d'Economie politique» un interesante estudio sobre las huelgas, en el cual demostraba que ellas no eran perjudiciales para los obreros, ni, de consiguiente, como veremos en seguida, perjudiciales para los intereses generales de un país.

Según los datos de Rist, que ha estudiado el fenómeno de las huelgas, especialmente en Francia y en Alemania, resultaría que ellas tienen una manifestación más intensa en las épocas de

mayor prosperidad, y es así como durante los periodos de mayor exportación, el número de huelgas ha sido mayor en Francia y en Alemania, habiéndose reducido de una manera extraordinaria los casos de paro forzoso ó de desocupación. En consecuencia, existe una relación directa entre las huelgas y el paro forzoso, por una parte, y las exportaciones por otra. Esto demuestra que no producen perjuicio para un país estos movimientos en determinadas condiciones, necesarios para los obreros que no disponen de un medio legal ó contractual suficiente y racional para conseguir sus reivindicaciones.

Demuestran estos estudios de Rist que las huelgas obedecen, por regla general, á razones de orden económico, que están en la esencia del régimen capitalista de la producción; y solamente por una legislación previsorá ó por un sistema de reglamentación colectiva del trabajo, podría llegarse dentro del régimen capitalista á suplantarlo este sistema por otro procedimiento racional. Demuestran que las huelgas no son hechos que obedezcan á la voluntad de un reducido número de hombres, de agitadores, sino que son la obra, generalmente consciente, de los gremios obreros que en un determinado instante necesitan recurrir á este procedimiento, siempre legal, para obtener aquellas mejoras indispensables para su vida.

Ha habido una opinión equivocada, á mi juicio, y que ha prevalecido durante largo tiempo, tanto en Europa como en nuestro país, respecto del origen de las huelgas. Según esa opinión, resultaría que aquéllas obedecen á la voluntad de unos cuantos individuos que aprovechan de la pasividad de la mayoría de los obreros para producir movimientos de esta índole. Esta opinión es equivocada, y para demostrarlo me voy á permitir leer la opinión de un ilustrado sociólogo, quien se ocupa especialmente de esta materia. Es Jorge Renard, profesor del Colegio de Francia, quien dice:

«Estos movimientos tienen más orden y más razón de lo que puede parecer á primera vista. El número, la importancia, el sentido de las huelgas no aparecen como el resultado del azar, de las impulsiones de la masa, de las excita-

ciones de los pretendidos *meneurs*, de las presiones ó de los errores de un momento. Las causas y los motivos como los aumentos y las disminuciones, se dejan analizar y clasificar con regularidad; y, ante esta regularidad, se deja de creer que ellas puedan crearse, detenerse, ó, aun arreglarse por una simple acción exterior arbitraria. Un estudio imparcial sobre documentos y estadísticas de los principales estados, permite reconocer que las huelgas, tomadas en su conjunto, no representan una pérdida para los obreros: calculando sobre las huelgas relativas al salario, la pérdida total de los mismos, comparada con el aumento de salarios obtenido por las huelgas triunfantes, se encuentra, en general, que basta un tiempo corto para que este suplemento cubra la pérdida, y que, al cabo de un año, por ejemplo, constituya ya un beneficio, á menudo notable.»

Quiere decir, en consecuencia, que dentro del régimen capitalista, fundado sobre una injusta repartición de la riqueza, la huelga es un fenómeno fatal, un fenómeno determinado por condiciones especiales que no está en la mano del legislador evitar por ningún medio. Así como la estadística comprueba que, en determinadas estaciones ó en determinadas regiones del globo, ciertos delitos tienen una manifestación regular, así también la estadística comprueba de una manera evidente, que en determinados periodos y zonas industriales las huelgas son un hecho necesario, creadas por las condiciones económicas del momento histórico. Descaba traer esta referencia para demostrar que no corresponde al Gobierno intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo, colocándose del lado de los primeros y desafiando las iras de los segundos, sino dejar que libremente juegue cada grupo su papel, y que, tanto unos como otros, encuentren el amparo de la ley para resolver sus cuestiones.

Las huelgas habrán de ser reemplazadas en el régimen individualista de la producción y de la distribución de la riqueza, por la voluntad jurídica manifestada en el contrato colectivo, que existe realmente en diversos países. Está creándose un nuevo derecho que tiende á amparar á los obreros en las relaciones de hecho en que se encuentre res-

pecto de los patrones. Este nuevo derecho ha llegado á la forma del contrato colectivo del trabajo entre los sindicatos patronales y los sindicatos obreros, ó bien entre estos últimos y los patrones en particular. Esta fórmula del contrato colectivo del trabajo puede, en algún instante, cuando los organismos obreros y patronales estén suficientemente organizados y desarrollados, llegar á resolver los conflictos planteados entre el capital y el trabajo. De esa manera habremos de suplantar por el sistema contractual de la libre voluntad de los sindicatos patronales y obreros el sistema legal de la protección al trabajo.

En Inglaterra y Alemania, son ya numerosos los contratos colectivos de trabajo celebrados entre los patrones y trabajadores, si bien es cierto que allí la ley todavía no ha llegado á reglamentarlos; pero, últimamente, en estos días, la Cámara de Diputados de Francia, acaba de sancionar un proyecto de ley, estableciendo la convención colectiva: éste es un progreso notable de la novísima legislación, que tiende á cubrir los vacíos que existen, bien en la ley, para proteger ó tutelar los intereses obreros, ó bien en el movimiento sindical de estos últimos y los patrones.

Si acaso pudiera objetarse que esto puede suceder en las industrias privadas, pero no respecto de los servicios públicos, presentaría el ejemplo de un país avanzado en materia de legislación y que encuéntrase en un estado de prosperidad general, en el que también se ha encontrado la fórmula de establecer el contrato colectivo en los servicios públicos: estoy refiriéndome á Suiza, donde hace poco tiempo se celebró un contrato de esta índole, determinándose las condiciones del trabajo, la jornada de labor y el salario mínimo, entre el sindicato de los empleados ferroviarios y el gobierno de la nación. ¡He ahí, señor Presidente, como á este respecto de los servicios públicos, los gobiernos que preocupan de esta materia han encontrado el medio razonable para resolver los conflictos que puedan plantearse entre el capital y el trabajo!

Todo esto revela, señor Presidente, que sería inconveniente aceptar en esta ley de pensiones y retiros, una disposición que desconociera á los obreros la

facultad de ejercitar un derecho; un derecho consagrado por la Constitución Nacional, que ha sido reconocido como legítimo en la época moderna por todas las legislaciones del mundo; un derecho que no puede discutirse, en manera alguna, porque el Estado no puede obligar á nadie á trabajar, porque no puede el Gobierno impedir, que por medio de la asociación, los productores se ligen entre sí para obtener de los empresarios aquellas condiciones de mejoramiento que son indispensables para su bienestar y para elevar su nivel material de vida.

Bien, pues; no ha llegado el momento en nuestro país de que limitemos, ni siquiera de que reglamentemos el derecho de huelga de los empleados y obreros de los servicios públicos. Estos empleados y obreros ferroviarios están en perfectas condiciones de realizar una acción inteligente para mejorar sus servicios en medio del desamparo en que han estado siempre por parte de los gobiernos de nuestro país. Estos obreros, según la legislación fundamental de nuestra República en materia ferroviaria, no están privados de recurrir á la coalición para obtener las mejoras indispensables para su buena salud ó su propio bienestar. En efecto, señor Presidente, la ley ferroviaria de 1894, en las disposiciones penales comprendidas en el capítulo 1.º del título 5.º, no encierra ninguna que prohíba el derecho de huelga, y si bien es exacto que algún artículo castiga á los que realicen actos de coacción para obligar á los obreros al abandono del servicio, no es menos cierto, que ésta es una regla del derecho común y no de legislación especial. Toda coacción debe ser castigada, pero esta disposición en manera alguna limita el derecho de los obreros y empleados para retirarse del servicio dentro del término establecido en la misma ley, con el objeto de obtener aquellas mejoras que necesitan para sí mismos. Es cierto que el artículo 84 castiga los empleados y obreros que abandonen su trabajo pero esta disposición entiéndese con relación al tiempo en que deben prestar sus servicios, pues una vez que hayan cumplido ese tiempo, todo obrero, foguista, maquinista, cambista, etc., tiene el derecho de recurrir á este procedimiento perfectamente lici-

to y amparado así por la legislación fundamental de nuestro país, de reclamar de los patronos todas aquellas medidas que crea necesarias para su progreso y mejoramiento.

Los obreros ferroviarios de nuestro país en parte están organizados, y en parte tratan de organizarse para constituir así su entidad representativa en los conflictos que pueda tener el trabajo con las empresas capitalistas de los ferrocarriles. El Poder Ejecutivo debe procurar, en vez de impedir, el desenvolvimiento de estas instituciones. Una de ellas, que puede presentarse como modelo de sociedades obreras, es «La Fraternidad», con personería jurídica dada por el Gobierno Nacional. Esta sociedad defiende de una manera inteligente y consciente los derechos de los maquinistas y foguistas, y si bien es cierto que en determinadas ocasiones se ha visto en la imprescindible necesidad de recurrir á la huelga, ha sido porque las empresas no atendían sus reclamaciones y porque el Poder Ejecutivo no usó de aquellas medidas morales y legales de que podía disponer para ejercitar una intervención en beneficio de los obreros de las empresas y de los intereses generales de la Nación.

Esto quería decir, sin perjuicio de extenderme en otras consideraciones, si acaso el señor Ministro de Obras Públicas ó el señor Senador por Entre Ríos dieran mayores fundamentos sobre este artículo, para sostener que no debe incorporarse á una ley de retiros. Y agregaré que no debemos nosotros detener corrientes sociales que están originándose ahora en nuestro país de una manera determinista: son manifestaciones de los tiempos históricos por que atravesamos; pero no son manifestaciones ilícitas, si no producidas dentro del marco de nuestro derecho fundamental; y, de consiguiente, no debemos recurrir á procedimientos de coacción y de fuerza que priven á los obreros de un derecho esencial y fundamental para su propio desenvolvimiento material, moral é intelectual, sino que, por el contrario, los Poderes Públicos deben seguir estos movimientos y dictar las medidas legales que sean indispensables para su mejor desarrollo.

De esta manera evitaríamos graves inconvenientes para el país; de este modo, respetando los derechos fundamentales de los obreros y preocupándonos de su bienestar, de sus condiciones materiales de vida, haremos lo posible para encauzar el desarrollo de nuestra civilización en las corrientes de la civilización moderna. Podrá parecer necesario, en algún momento, para quien no examina los acontecimientos de una manera serena é imparcial, recurrir á medidas de fuerza para contener estos movimientos, pero la historia demuestra que la fuerza jamás ha creado una situación normal, y es necesario proceder siempre por medios jurídicos dentro de la ley, la razón, el derecho y la justicia.

Y recordaré, para terminar, las palabras de un ilustre escritor, Saint Beuve, quien, en su *Vida de Madame de Staël* dice que fué la burguesía la que hizo la invasión en Francia en el año 1789: «el pueblo bajo, que había triunfado en 1793, ha sido repelido después diferentes veces, y hoy día está detenida la invasión como bajo el emperador Probo. Una nueva invasión amenaza, y sólo se trata de saber si ella se podrá dirigir ó amortiguar amigablemente, ó si no podrán evitarse las vías de la violencia».

He concluído.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—Pido la palabra.

Anticipé que el Poder Ejecutivo apoyaba el nuevo artículo del señor Senador por Entre Ríos y que me reservaba dar las razones que fueran necesarias.

La exposición del señor Senador por la Capital me pone en el caso de dar, en la forma más concisa posible, las razones que mueven al Ejecutivo á adherir, en los términos más absolutos, al pensamiento que encierra la modificación.

El señor Senador por la Capital nos ha hecho una disertación muy interesante, sobre el derecho del obrero á la huelga. Yo acompaño al señor Senador por la Capital, en cuanto se refiere al derecho de huelga del obrero en general; pero lamento que él no haya tomado en consideración el único punto que nos interesa en la discusión de esta ley, es decir, el derecho de huelga, cuando se trata de servicios públicos. No se pue-

de asimilar el derecho de no trabajar que emerge del derecho consagrado por la Constitución, cuando se trata de servicios públicos, al caso de los servicios privados, pues aquí cambia la cuestión, y es necesario averiguar hasta dónde alcanza la amplitud de ese derecho individual.

El servicio de los ferrocarriles, na tie lo niega, es un servicio esencialmente público, afecta al desarrollo del comercio y de la industria y de él depende la vida misma del movimiento de todo el territorio, siendo además un instrumento indispensable bajo el punto de vista militar y bajo el de las comunicaciones ó sea el correo. Todos estos servicios sólo pueden ser realizados por intermedio de los ferrocarriles y tratándose de los servicios más necesarios y más indispensables para la vida misma de la Nación, es llegado el caso de examinar si los derechos individuales de los obreros afectados al servicio ferroviario pueden sobreponerse en cualquier momento á los derechos de la Nación.

Me parece, señor Presidente, que establecer la cuestión es deducir con facilidad la única respuesta que puede darse. No hay derecho individual, por sagrado que sea, que pueda ser opuesto al derecho general de la Nación, á su existencia y á su vida misma. ¿Qué diríamos si, en un momento de zozobras internacionales, en que fuera necesario movilizar las fuerzas de la Nación, un grupo de obreros, movidos por intereses puramente personales, se negaran á efectuar este transporte esencial para la seguridad del Territorio? ¿Podría aceptarse en alguna forma que ese derecho á la huelga puede aplicarse al servicio público, cuando está destinado á realizar tan grande y tan fundamental función?

**Sr. Del Valle Iberlucea**—El estado de guerra no es el estado de paz.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—¿Podría admitirse que en el estado de paz—ya que parece no interesarle al señor Senador una de las situaciones que más debemos cuidar, cuando como hombres de gobierno dictamos leyes como la presente—podría admitirse, pregunto, que en tiempo de paz, por intereses individuales de ciertas clases de obreros mas íntimamente vinculados á este servicio,

se suspenda el correo, la transmisión de las comunicaciones por toda la República? ¿Es posible que se paralice el movimiento de la producción económica, que se estanque el movimiento comercial, que se acreciente el precio de los primeros artículos de consumo, en fin, que se produzca una verdadera catástrofe económica en todo el país, por la sola razón de que algunos grupos de obreros, más ó menos numerosos, consideren que deben trabajar menos ó deben ganar más? Me parece que colocándose en la situación elevada en que debe colocarse un legislador, no se puede titular un instante al resolver este problema. Cuando se trata de servicios públicos como el ferroviario, prima, sobre todo, el interés general del país.

La disposición que desea incorporar el señor Senador por Entre Ríos, es cierto y lo admito sin ambages, tiende á evitar y prohibir el derecho de huelga. No creo que en la redacción se haya omitido la palabra por no tener el valor de pronunciarla, sino para encuadrar mejor el concepto jurídico que ha querido enunciarse.

Pero, decía el señor Senador que la aceptación de este principio sería una novedad peligrosa en nuestra legislación nacional; se olvidaba ó, más bien dicho, callaba intencionalmente...

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Para replicarle al señor Ministro después.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—...no sé con qué fundamento; ahora conozco la razón y espero con interés su réplica—digo que callaba el señor Senador por la Capital que éste no es un principio nuevo en ninguna legislación, que es un principio absolutamente conocido, que ha sido aceptado por todos los obreros hasta el presente y que hace más de veinte años que tiene su régimen establecido en el país.

En efecto, señor Presidente, la ley General de Ferrocarriles, en ese artículo, que tan á la ligera nos leyó el señor Senador por la Capital, establece lo siguiente: Los mecánicos, conductores, guardatrenes y demás empleados que abandonen su puesto ó se hallen ebrios durante su servicio respectivo, serán penados con arresto de un mes á un año ó con multa de cien á mil pesos.

¿Qué significa este artículo? ¿Cómo

es posible que esta ley exija á un obrero la obligación de trabajar, cuando, según el señor Senador, la Constitución le garante el derecho de trabajar ó no? ¿Cómo es posible, que se haya respetado esta disposición por todos los obreros y por todos los partidos existentes, si fuese cierto que significa una iniquidad?

Es que se ha aceptado, desde entonces, que en el servicio ferroviario no pueden aplicarse las prescripciones comunes al contrato de trabajo y que, en materia de servicio público, el que una vez acepta la obligación de prestarlo, tiene que continuar haciéndolo, mientras que su resolución de no trabajar no perjudique ó interrumpa ese servicio público. Es un principio análogo al establecido en el mandato, en que si bien es cierto que el mandatario tiene derecho á renunciar en cualquier momento el mandato conferido, debe, sin embargo, mientras el mandante encuentra sustituto, llenar todas las funciones de mandatario, para no causar perjuicio á su mandante.

En consecuencia, el artículo propuesto por el señor Senador por Entre Ríos, no encierra en forma alguna un principio nuevo para nuestra legislación y es simplemente la aplicación del mismo principio en esta ley.

Pero el señor Senador por la Capital decía, que esta ley no es la oportunidad para reglamentar las huelgas y que si acaso el Poder Ejecutivo consideraba conveniente tratar este asunto, debía preocuparse de redactar un proyecto de ley especial.

Sostener ésto, es olvidarse una vez más de la razón fundamental que nos lleva á discutir y á sancionar esta ley.

Hemos invocado repetidas veces y el mismo señor Senador por la Capital lo ha hecho, que estamos imponiendo un gravamen á las empresas y á los productores, porque estamos discutiendo una ley de orden público, una ley que viene á garantizar los intereses generales de la Nación y no como lo pensaba el señor Senador por la Capital, una simple ley que no tenga más objeto que beneficiar la situación de los empleados y obreros ferroviarios, porque si esta fuera nuestra intención cometeríamos un acto de verdadera injusticia no dic-

tando una ley análoga para tantos otros obreros y empleados que merecen la misma atención que los obreros y empleados ferroviarios.

Si nos hemos avocado este problema, si vamos á establecer la jubilación obligatoria de estos empleados, es precisamente porque hemos tenido en vista que vamos á dictar una ley que garantizará la seguridad del servicio de los ferrocarriles del Estado, y, en consecuencia, omitir esta disposición en esta ley, sería dejar trunco el pensamiento que nos ha movido para proyectarla, discutirla y sancionarla.

El derecho que nos asiste para hacerlo es, pues, bajo todo punto de vista, evidente. Recordemos un instante en qué forma procedieron algunas de las naciones que encabezan el movimiento legislativo del mundo en materia de legislación social; recordemos un instante la forma en que el Gobierno de la República Francesa trató de conjurar los inconvenientes de la huelga ferroviaria. Todos tenemos fresco el recuerdo de que, declarada una huelga en los ferrocarriles del Estado, el Gobierno de Francia no vaciló en llamar bajo las armas á todos los empleados para imponer, en plena paz, la ley marcial al servicio de los ferrocarriles.

Por otra parte, tanto la doctrina como la legislación de otros países, nos aportan un elemento valioso para demostrar el derecho absoluto de la Nación para impedir todos aquellos actos que pueden causar la interrupción en la continuidad de los servicios ferroviarios. La Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo, en una de sus sentencias, un principio que es conveniente recordar cada vez que se debaten estos asuntos. Con motivo de una huelga ferroviaria en el año 1894, la Corte de Circuito, dictó una orden contra los jefes del movimiento huelguista, prohibiéndoles encabezar estos movimientos. Hay que recordar que los tribunales americanos tienen la facultad de pronunciar ciertas providencias que se llaman «injunction», que tienen por objeto prohibir á determinadas personas que hagan determinados actos. Los jefes del movimiento huelguista desatendieron la orden dada, y la Corte de Circuito se vió



obligada á imponer á dichos cabecillas una pena de arresto de tres á seis meses. Apelada esta resolución, la Suprema Corte de los Estados Unidos la confirmó sosteniendo, entre otros, este principio á que me he referido anteriormente: «Pertenece á la nación el derecho de reprimir cualquier obstrucción sobre las vías naturales ó artificiales abiertas al comercio entre estados y necesarias al correo».

Es un gran principio, un sabio principio que debe tenerse en cuenta siempre que se trate de estudiar el alcance del derecho de la huelga en relación á los servicios públicos.

El señor Senador por la Capital agregaba que no era lícito introducir este artículo en el proyecto de ley, porque habiéndose reformado la Caja, de modo que, en vez de ser una institución oficial del Estado, viene á ser una caja común de las empresas particulares, ya no existiría el derecho de incluir un principio de ese género, que vendría á favorecer á las empresas. En primer lugar, lo único que se ha hecho al modificar el artículo 1.º es eliminar al Estado en cuanto á su responsabilidad respecto á la suerte y vida financiera de esta Caja, pero en ningún momento se ha negado que esta Caja es una caja oficialmente instituida por el Gobierno de la Nación, en virtud de esta ley, en la que interviene en todo momento para reglamentarla y vigilarla, y en la cual por mandato de la misma, impone imperativamente á las empresas, á los obreros y al productor, la contribución al fondo que ha de servir de base á esta Caja. Pero se quiere sostener que este principio viene á favorecer á las empresas; creo que no es necesario que me detenga en demostrar que el único interés que puede movernos á dar esta sanción, es el interés de la producción, del comercio y del país mismo, que puede ser afectado por una huelga, y no el interés de las empresas que, en este caso, es sumamente reducido en relación al que tiene la Nación en mantener la continuidad de estos servicios.

Agregaba el señor Senador por la Capital, que este principio que se pretende incorporar, era tan absurdo y vejatorio,

que ni en la incisa ley de defensa social, como la calificaba el señor Senador...

**Sr. Maciá**—Ignominiosa, dijo el señor Senador.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—... ó ignominiosa, se había pretendido establecer semejante disposición.

No es el caso, señor Presidente, de discutir la ley de defensa social, en la que es cierto interviene como diputado, y respecto á la cual no tengo inconveniente en reconocer que tiene muchos errores é inconvenientes que convendría salvar; pero es indudable que, por otro lado, esa ley ha sancionado principios que el mismo señor Senador por la Capital ha reconocido en esta sesión, y que era muy conveniente establecer.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—¿Qué principios, señor Ministro?

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—La falta del derecho de la coacción en materia de huelga.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Eso está reglamentado en el Código Penal....

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—Por eso lo ha reconocido.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Pero no era necesario sancionar una ley draconiana de excepción, para castigar amenazas que ya están penadas, como digo, por ese código.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—No veo cómo sería una ley draconiana cuando, según el señor Senador no hace sino repetir lo que está ya establecido en el Código Penal.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Por eso, decía, que la ley de defensa social no llegaba á los extremos del artículo que proyecta el señor Senador por Entre Ríos, que castiga el derecho de huelga.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—Muy bien. Digo que la ley de defensa social no tuvo que ocuparse de la cuestión huelga, porque, en principio general, es necesario admitir hoy el derecho del obrero á la huelga, y como ahí se discutía una ley general, hubiera sido un absurdo dictar una disposición que prohibiera las huelgas en general, pero, en el presente caso, vuelvo á repetir, se trata del derecho de huelga en casos de servicios públicos, como el de los ferroviarios.

El derecho de asociación, sobre el que tanto ha insistido el señor Senador por

la Capital, no queda, en absoluto, afectado por esta disposición. Los obreros podrán asociarse para fines útiles o para los fines que consideren convenientes, en la forma más amplia que garante la Constitución Nacional, y, en nada interviene y en nada perjudica el artículo presentado por el señor Senador por Entre Ríos. Lo que no pueden hacer es interrumpir el tráfico y movimiento de los ferrocarriles.

El señor Senador decía que ésta es una disposición draconiana, establecida exclusivamente, en beneficio de las empresas. Aquí el señor Senador no ha querido analizar sino una sola parte de la disposición y se olvida que existe otra parte muy importante, que viene á establecer un principio de lo que él mismo desearía que se estableciese en el país. El se ha olvidado de mencionar que esta misma disposición deja á los empleados y obreros de los ferrocarriles, un recurso de apelación ante la junta creada por este artículo, en la que ellos tienen representación, y la cual queda ampliamente facultada para suspender, ya sea total ó parcialmente, la sanción de este artículo siempre que á su juicio soberano, el abandono del servicio hubiese sido producido por fuerza mayor ó causa justificada. No es, pues, un palo de ciego dado sobre los derechos de los obreros ó empleados, sino un principio de orden, un principio de sabia legislación tendiente á salvaguardar los intereses generales del país interesado en la regularidad del servicio ferroviario. Pero ¿acaso esta disposición es nueva en las leyes existentes respecto á las jubilaciones de los empleados?

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Está en la ley de Victoria.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—No es nueva, y en diversos países existen disposiciones mucho más severas y mucho más draconianas, como las califica el señor Senador por la Capital, que la que se pretende introducir en esta ley.

En Nueva Zelandia, país citado con tanta frecuencia por aquellos que quieren introducir la legislación social, si bien es cierto que existe el arbitraje obligatorio para las cuestiones entre patrones y obreros, existe al mismo tiempo una disposición que castiga la huelga en servicio público como un verdadero delito; y debo de paso mencionar

que hay que dar á esta cuestión del arbitraje obligatorio el valor que realmente tiene. Resulta en Nueva Zelandia que los únicos que resisten hoy el arbitraje obligatorio son los mismos obreros y empleados, y los únicos que solicitan y desean mantenerlo son precisamente los patrones; de modo que de la existencia del arbitraje obligatorio no puede hacerse un argumento excesivo para sostener que esta disposición sólo puede establecerse donde exista el arbitraje.

Ya se adelantaba el señor Senador por la Capital para anunciar que en Victoria, en Australia, la ley de 1903, en su artículo 3.º, contiene una disposición absolutamente semejante ó parecida á la que ha propuesto el señor Senador por Entre Ríos.

Dicha disposición establece que «todo funcionario ó empleado al servicio de los ferrocarriles, que se declare en huelga, será considerado, sin otro requisito, como habiendo cesado en su empleo, por el solo hecho de haberse declarado en huelga, y como habiendo renunciado á todo derecho, pensión, gratificación, retiro ó renta, como asimismo á cualquier derecho ó privilegio de la naturaleza que fuese, derivado del empleo que ocupaba, salvo los salarios que le eran debidos en el momento de la huelga.»

Por otra parte, la ley italiana prevé disposiciones perfectamente parecidas, si no análogas.

Dice la ley italiana de 7 de Julio de 1907: «Sin perjuicio de las acciones penales, según las leyes en vigor, aquéllos que voluntariamente hubieren abandonado su empleo, ó que no lo volviesen á ocupar, ó que no prestasen sus servicios, de manera que resultase una interrupción ó perturbación en la continuidad ó regularidad del servicio, serán considerados como dimisionarios y reemplazados.» Y, por último, en los Países Bajos, en el año 1903, después de una huelga cruenta de ferroviarios que puso en peligro un momento la estabilidad de la nación, se dictó una ley, el 11 de Abril, que contiene la siguiente disposición: «Toda persona empleada en el servicio de ferrocarriles, que con el objeto de provocar ó de prolongar una interrupción en el servicio ferroviario, se rehuse á efectuar el trabajo de su empleo, será castigado con una

pena que podrá elevarse hasta seis meses de prisión ó una multa de trescientos florines.»

De manera que lo que se trata de introducir en la presente ley es un principio perfectamente consagrado en las legislaciones análogas que nos sirven de modelo en la materia.

No sé, señor Presidente, si se me ha escapado alguno de los argumentos aducidos por el señor Senador por la Capital al exponer su disidencia con el artículo propuesto.

Para terminar, deseo recordar las palabras del Ministro Briand, pronunciadas en 1910 en el Parlamento francés con motivo de la huelga ferroviaria. Y esto, á pesar de que por manifestaciones anteriores que nos ha hecho el señor Senador por la Capital, el señor Ministro Briand le merece poca fe y poco respeto, porque, según él, ha saltado al otro lado de la barricada. Es necesario no olvidarse de que Briand representa una de las primeras personalidades francesas de la época moderna, que si es cierto, según la expresión del señor Senador, que ha saltado la barricada, es que, tal vez, con la madurez de su juicio, habrá llegado á reconocer el error en que ha estado anteriormente y se habrá convencido que cuando se está con las responsabilidades del gobierno, las cosas y los intereses nacionales, se contemplan de muy distinta manera que hablando en el comité ó haciendo propaganda desde la plaza pública...

**Sr. Del Valle Iberlucea**—O desde la banca del Senado.

**Sr. Ministro de Obras Públicas**—Precisamente, hay que evitar de legislar desde las barricadas. Nada hay más peligroso que tratar los intereses generales de la Nación con las pasiones, prevenciones y las inclinaciones del hombre que está en medio de la lucha, rodeado exclusivamente por una de las partes y dejándose impresionar solamente por ella. Es necesario siempre levantarse por encima de los intereses que están en lucha y tratar de encontrar la senda donde pueden conciliarse los intereses individuales con los intereses generales del Estado.

Con motivo de las huelgas ferroviarias, se discutieron en el parlamento

francés los derechos que había tenido el gobierno para convocar á los empleados ferroviarios al servicio de las armas á fin de mantener la regularidad en el servicio de ferrocarriles, y, con ese motivo, el ministro Briand pronunció estas palabras, que creo del caso repetir: «Estoy dispuesto á reconocer que no existe ningún texto especial que se oponga á que los obreros de las vías férreas hagan una huelga; quiero admitir, por un instante que les pertenezca el derecho teórico á la huelga y que hayan podido usarlo legalmente; pero, señores, es necesario decirlo desde esta tribuna, existe otro derecho que no se ha mencionado hasta ahora en este debate, es el derecho de la sociedad á la vida. No hay libertad, por respetable que ella sea, no hay libertad particular ó corporativa, cuyo ejercicio pueda atentar legítimamente contra el derecho de la Nación á la vida.»

Es este mismo principio el que mueve al Poder Ejecutivo para prestar todo su apoyo y toda su adhesión á la modificación propuesta por el señor Senador por Entre Ríos.

He dicho, señor Presidente.

**Sr. Maciá**—Pido la palabra.

Empecé á escuchar con verdadera alarma al señor Senador por la Capital, cuando comenzó su exposición estableciendo, en absoluto, que el proyecto de artículo que he presentado, violaba flagrantemente preceptos de la Constitución. Me duró esa zozobra bastante, porque pasó un largo espacio de tiempo sin que sintetizara la razón por qué este proyecto de artículo ataca á la Constitución. Resultó que ataca á la libertad del trabajo. Yo no soy hombre de derecho; pero sí soy hombre de conciencia, y no puede caber jamás en mi mente atacar á ninguna libertad, y, si presento este proyecto, fué con la persuasión de que no hay libertad, ni derecho, que no tenga sus limitaciones forzosas y necesarias en los derechos de los demás. Ese es el fundamento del artículo y es también la doctrina constitucional. El derecho de uno concluye donde empieza el derecho del otro, y harto se ha dicho que no hay libertad que no tenga sus limitaciones. Creo que estoy dentro de esa doctrina justa, como lo he de demostrar.

Esperaba, señor Presidente, que, con motivo del artículo, sonara la palabra *huelga*; tenía que sonar forzosamente. Hay, en esta materia, confusiones en que no podemos entendernos los que predicamos las ideas avanzadas socialistas y los que estamos tranquilamente analizando las diferentes doctrinas para llegar á un término de equilibrio y de justicia, que ojalá llegue á dejar, alguna vez, á todos satisfechos.

Decía el señor Senador, que rompe el derecho consagrado de la huelga. Lo niego en absoluto.

Señor Presidente, aparte de los datos que el señor Ministro de Obras Públicas acaba de presentar, de que la huelga de ferroviarios está condenada en casi todas las naciones del mundo, yo puedo presentar otros; pero, desde luego, puedo asegurar que acaso no hay nación, ni aun en las naciones donde se han constituido gobiernos socialistas, en que la huelga ferroviaria no esté condenada y hasta penada con multa y prisión.

Lo de las cámaras sindicales de trabajo, articulación que permite llegar á la condenación de la huelga, es un poco ilusorio, sobre todo en esa Nueva Zelanda, que fué el baluarte del socialismo en cierto tiempo, porque esos tribunales de arbitraje, con un espíritu de socialismo exagerado, que no es el mío, —pues el socialismo que tiende á proteger al obrero es el mío, y no lo es el que tiende á sobreponerle á todas las agrupaciones y á todos los intereses—da derecho á las uniones de obreros para renunciar al arbitraje, y les niega á las uniones industriales el derecho de no aceptarlo. Es en consecuencia una articulación profundamente injusta que obliga á una parte y deja libre á la otra, y con esa rara legislación Nueva Zelanda ha condenado la huelga ferroviaria ó impone por ella penas de prisión y de multa. No es, por consiguiente, cierto que es un derecho consagrado, el derecho á la huelga.

Yo huyo en este debate, como huyo siempre, de entrar en un terreno abstracto, porque en él todas las aseveraciones pueden hacerse y siempre hay en ellas parte de verdad, como puede haberla en la exposición del señor Senador; pero el señor Senador no debe

ahora discutir si, *en abstracto*, tiene el obrero esos medios de defensa que se ejercitan por la huelga. Esto es inútil discutirlo, pues los verdaderos demócratas, los amigos de la libertad, llegamos á consagrar hasta el derecho de rebelión contra un tirano, pero ese derecho sólo lo aceptamos en situaciones extremas: cuando la ley y los jueces han sido suprimidos por la tiranía.

Decía el señor Senador, partiendo de la base de que con este artículo se prohíbe á los obreros ferroviarios la huelga, que damos á las empresas una defensa contra ella. Sí, señor Presidente, se la damos.

¿Es que, por ventura, por la Ley General de Ferrocarriles las empresas no tienen obligaciones imperiosas que cumplir y responsabilidades enormes por la interrupción del tráfico, por la demora de las cargas, y por la no traslación de pasajeros? ¿Es que hemos de vivir siempre indecisos en este terreno de legislación, que haga que estas cuestiones sólo se pueden resolver mediante decretos del Poder Ejecutivo que declare ó no cada situación como un caso de fuerza mayor?

Así se resolvió la huelga de 1911; así se descargó á las empresas de la obligación de cumplir las prescripciones de la Ley General de Ferrocarriles, y así se pudo conjurar el peligro de entonces.

Ahora, saliendo del terreno de la abstracción, se trata de establecer claramente que la huelga es caso de fuerza mayor y que el empleado huelguista debe ser separado y substituído. ¿Por qué?

Porque toda la tendencia del proyecto, si bien es favorecer al obrero, obedece á garantizar el buen servicio y á atender los intereses generales del país. Se debe partir de la consideración de que un empleado que sirve á un ferrocarril es indispensable para el servicio público, y, entonces, cuando él falta, debe ser reemplazado, porque el servicio no se debe interrumpir. Esa es la doctrina del artículo.

Se ha clasificado este precepto de impertinente. Tal vez el adjetivo sea un poco duro; pero entiendo que se ha querido decir que no corresponde á este

momento, pues se sostiene que se debe tener en cuenta cuando se haga la legislación sobre el trabajo y los contratos del trabajo.

Entiendo que no, y lo que voy á decir no lo voy á decir como caso de igualdad, sino como caso de similitud. Si tuviéramos que dictar la ley orgánica de la policía de la Capital, yo incluiría este mismo artículo en esa ley, prescindiendo de si hay ó no reglamentación del contrato del trabajo, y sostengo que cuando esa reglamentación se haga, en lo referente á ferrocarriles, se debe partir de la base de que el servicio ferroviario es un servicio de interés público, con todo el carácter y todas las obligaciones del interés público.

Como no quiero dejar librado el que en la ley futura del trabajo se establezcan doctrinas distintas en materias ferrocarrileras que serían perjudiciales, creo, por consiguiente, que en este momento corresponde esta legislación, y creo que este punto es el fundamental de la ley. Si los empleados y obreros ferroviarios no han de aceptar esta justa compensación de la situación en que se los coloca, ya lo dije en la discusión en general, yo entiendo que la ley no debe dictarse; que si el país no ha de tener ninguna garantía, que si ha de peligrar por la inestabilidad de los ferrocarriles; que si ha de peligrar por las zozobras que su riqueza y producción pasen, no tenemos por qué preocuparnos de un gremio que ni siquiera quiere dar al país esa garantía.

Partimos, indudablemente, con el señor Senador por la Capital de puntos muy distintos. El sostiene que este proyecto es de orden general, porque garantizando á los empleados garante mejor al servicio. Yo he desarrollado mi doctrina al respecto y creo que es más justa y más lógica. Este proyecto es de orden general, porque el servicio á que se refiere es uno de los servicios de necesidad vital para el país: éso es lo que le da el carácter de proyecto de orden público; y en virtud de ser el servicio una necesidad vital para el país, que obliga á los que lo desempeñan á consagrarle una asiduidad especial y á trabajar en determinadas condiciones, el Estado tiene el deber de crear á sus empleados una situación de compensa-

ción y seguridad que sea el equivalente exacto del sacrificio que hacen aceptando un trabajo en condiciones más exigentes que la generalidad de otros trabajadores.

Partiendo de la base de que la huelga es un derecho consagrado, dice el señor Senador que damos á las empresas la parte del león. Siempre parece así: el rico es prepotente siempre; pero la Fontaine, el sapientísimo, aunque risaño fabulista, ya escribió la fábula del león y las hormigas: el león parecía omnipotente, sin embargo las hormigas lo hicieron perecer. (*Risas.*) ¿Qué tienen las empresas para defenderse? ¿El derecho de manejar los sueldos? ¿Pero quién se defiende contra la fuerza formidable de la totalidad de los empleados coaligados contra esas empresas? ¿Hay alguna fuerza superior á ésa? Cuando esa fuerza fracasa es porque las opiniones no son unánimes, es porque la diversidad de opiniones rompe la unidad de acción; pero el derecho de huelga, como lo entiende el señor Senador, es consagrar el derecho de una mayoría numérica ejercitando una presión de fuerza en prosecución de un interés, que lo mismo puede ser con justicia que con injusticia, lo mismo con derecho que sin derecho. Y bien, lo que este proyecto hace no es negar el derecho de asociación á los empleados— asíciense, enhorabuena — lo que les prohíbe es que recurran á medios ilícitos; lo que les prohíbe es recurrir al derecho de la fuerza para que triunfen sus ideas; y hemos de ver cómo ésa es la prédica socialista cuando toque algunos otros detalles para fundamentar este proyecto.

Sostiene el señor Senador que en este proyecto los cargadores no tienen parte. Indudablemente, el clavo no tiene parte en la tenaza, pero cuando los dos dientes lo agarran ¡caramba si tiene parte el clavo en las consecuencias! (*Risas.*)

Los cargadores no tienen parte en los conflictos entre las empresas y los obreros; pero cuando ese conflicto los agarra y compromete sus intereses más vitales ¿tiene ó no tiene el cargador una intervención enorme, desgraciadamente, en ese suceso? Ese es el fundamento de por qué á los interesados en evitar el

peligro les pedimos una contribución; pero tenemos el deber de garantizarlos en compensación de esa contribución.

Pero, señor Presidente, uno de los absurdos que este sistema de resolver las cuestiones por la fuerza de las huelgas tiene, es que procede de una lucha entre dos, perjudicando á terceros, que ninguna parte tienen en la cuestión. Ese es, teóricamente, uno de los puntos más flacos del predicado derecho de huelga; derecho que en abstracto puede reconocerse, pero derecho que, en cada caso, hay que reglamentar y legislar, porque así como no es la pena lo que hace al mártir, sino la causa; lo mismo no es la fuerza lo que hace buena la huelga, sino el derecho de justicia con que ella se hace.

De paso, señor Presidente, me referiré á mi actitud á que ha hecho alusión el señor Senador, en la discusión de la ley de defensa social. Efectivamente, en la discusión hice algunas observaciones y encontré algunas prescripciones un poco exageradas, y, sobre todo, me opuse á que se discutiera con precipitación. Pero me parece, señor Presidente, que ni la ley de defensa social, ni ninguna ley de este Parlamento, merece los epítetos que el señor Senador le ha aplicado, y, en los cuales divergimos. Aunque yo la hubiera combatido, no la combatí en lo fundamental, porque no soy de los que creen que cuando la Constitución abre este suelo para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitarlo, pretende que pobleemos los jardines con hormigas; soy de los que creen que debemos fomentar la inmigración y nuestra población con elementos sanos, no nocivos, anárquicos y disolventes, pero dictada la ley, aunque la hubiera combatido, la habría acatado, y me hubiera guardado muy bien, sobre todo en el seno de esta honorable Cámara, de llamar ignominiosa una ley de la Nación, término, contra el cual protesto como corresponde.

Hay ciertos detalles en la exposición del señor Senador, que me llaman la atención. Llama gremio proletario al de ferrocarrileros; yo, que tengo por él una estimación profunda, aunque de diferentes matices de la del señor Senador, me hubiera guardado muy bien de usar ese epíteto. Yo no sé si las nece-

sidades del gremio ferrocarrilero le dan derecho á ese epíteto, creo que no; pero pienso en los pobres agricultores que pasan cuatro ó cinco años sin tener un peso de utilidad sobre todo su trabajo anual, mientras los ferrocarrileros tienen su existencia asegurada. Si el sueldo de éstos es exiguo, no hay nada más exiguo que tener que emigrar de una chacra para ir á buscar en otros confines tierra en que radicarse, empezando por buscar de nuevo el arado y el buey con que han de abrir el primer surco. En obsequio de esos agricultores es que esta ley se dicta. No es solamente en obsequio de los empleados ferroviarios, tan dignos de consideración como estos otros, sino también, como digo, en el de estos agricultores, por que todos tienen iguales derechos é iguales garantías, y el productor es fuente de vida, si el ferrocarril es uno de sus sostenes.

A la aseveración de que para legislar con inteligencia es preciso hacerlo en la ley del trabajo, no me queda nada que contestar sino que cada uno entiende las cosas como puede. Yo entiendo que este principio es para la República Argentina tan vital que debemos dejarlo establecido para que la ley del trabajo lo tenga en cuenta, como lo he dicho antes. Ya lo he dicho en la discusión en general é insisto ahora: este es el punto capital de esta ley y si este punto no queda perfectamente establecido, no vale la pena que dictemos la ley porque ni para el país ni para nadie habrá ventajas.

Yo no sé lo que el señor Senador entiende por derecho de coalición.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—El derecho de huelga.

**Sr. Maciá**—Efectivamente, este proyecto va derecho á prohibirla. Pero yo quisiera que el señor Senador encontrara en nuestra Constitución una sola prescripción que autorice ese derecho. He de tocar ese punto después, de paso, pero conste, señor Presidente, que el derecho de asociación, que el derecho de trabajo, que el derecho de reivindicación de lo que les corresponde á los obreros, por medios lícitos y pacíficos, no está en nada afectado por este proyecto. Están afectados los que deben necesariamente prohibirse, los que pro-

ducirán al país un perjuicio enorme en virtud de un interés que puede ser sagrado, pero que es mucho más pequeño que los intereses del país, como ha dicho muy bien el señor Ministro de Obras Públicas.

Tal vez las huelgas no sean perjudiciales. Las consideraciones de Rist que ha citado el señor Senador, prueban evidentemente, que para el obrero no son perjudiciales, pero falta saber si lo son ó no para los demás, y falta saber sobre todo si son perjudiciales para lo que es objeto de nuestra preferente atención: para el país.

El señor Ministro de Obras Públicas hablaba del inmenso peligro que sería una huelga en tiempo de guerra y el señor Senador le contestaba que el estado de guerra no es el estado de paz. Es verdad; pero para nosotros, señor Presidente, país joven, país que empieza á organizar su producción y metodizarla, país que todos los años tiene su riqueza comprometida por todas las eventualidades atmosféricas y climatéricas, país en que se puede producir una crisis por la pérdida de una cosecha, una huelga en los momentos intensos de recolección y transporte, una huelga de ferrocarriles sería un estado de guerra. Figurémonos el cuadro de la República con una huelga general de ferrocarriles en momentos del transporte de las cosechas: ¡Ni la sangre faltaría, señor Presidente, porque los choques serían tan violentos entre los agricultores condenados á perecer, y los huelguistas que los ponen en esa dura situación que hasta la sangre correría para que fuera exactamente igual la situación de desolación y ruina del país á que si estuviera en estado de guerra!

El señor Senador sostiene como principio constitucional que no se puede obligar á nadie á trabajar. No es del caso la consideración, porque este proyecto no obliga á nadie á ser ferrocarrilero; lo que hay que preguntar es si cuando un individuo se ha comprometido á trabajar hay ó no derecho de exigirle que continúe en su trabajo. Esta es la cuestión. Existe en nuestras leyes de ferrocarriles una legislación previosa contra los actos que puedan perturbar la marcha y regularidad de los fe-

rocarriles; pero, como en otras partes ya ha sucedido, son leyes iniciales, dictadas contra casos aislados, contra acciones privadas; y bien, señor Presidente, ¿es justo, es lógico que si los males y los daños se prohíben, no en virtud de quien los ejecuta sino en virtud de ser daños y ocasionar perjuicios, se puede permitir á un grupo lo que no se permite á un individuo? En ese sentido, mi proyecto llena un vacío de la ley de ferrocarriles, mi proyecto completa sus prescripciones y resuelve, definitivamente, la duda que existía de que pueden cometer actos prohibidos por esa ley, grupos de individuos, estando prohibidos para cada uno en particular.

Pasaré, muy rápidamente, por un argumento que ha hecho el señor Senador, estableciendo que las obligaciones de la ley de ferrocarriles, son solamente para los empleados mientras trabajan; que, después, ellos tienen el derecho á asociarse, á coaligarse. Perfectamente. Pero, ¿qué relación tiene eso con el proyecto, si es que he entendido bien su argumentación? De lo que se trata es de esto: de si vuelve ó no á su trabajo. Si no vuelve á su trabajo, está ya penado por la ley ferrocarrilera, y al no volver un grupo, quedará penado por esta ley; ésto es lo lógico y ésto es lo justo.

El ejemplo que ha citado el señor Senador de la actuación de «La Fraternidad», que interviene en la reglamentación del trabajo de los maquinistas, me hace á mí pensar en lo delicada y en lo laboriosa que tiene que ser la sanción de la ley de trabajo; es una ley tan complicada, una ley que tiene que prever tanto que, sobre todo en nuestro país—en que nuestras industrias están todas en evolución, en que nuestra formación étnica está todavía mal definida y en que la mezcla de hombres de diferentes tendencias y de diferentes ideales crea en nuestro trabajo una perturbación, que, en otras partes no existe—debe ser doblemente difícil y doblemente delicada.

Pero, que es necesario legislar sobre esta cuestión, lo prueba la misma «Fraternidad». Esta que se fundó como una sociedad de socorros mutuos, en determinado momento, se convirtió en una

sociedad de resistencia, levantándose contra la ley de ferrocarriles y contra otras prescripciones legales existentes, gracias á las cuales y en contrario de lo que muchos sostenían, el Gobierno pudo legalmente dominar la huelga.

Tiene razón el señor Senador al decir que la fuerza no conduce á nada; dijo esta frase refiriéndose á los gobiernos y creo me hará la justicia de no referirse á mí. Efectivamente, yo creo que la fuerza no conduce á nada; creo que en el orden moral como en el orden físico, las fuerzas se desarrollan de una manera muy semejante; dos fuerzas opuestas é iguales se destruyen, nunca llegan á nada, es necesario que obliquen y que se pongan en situación de que siguiendo la ley del paralelógramo de las fuerzas, puedan actuar de manera que lleguen á una resultante que es, en lo moral, como en lo físico, la solución más conveniente, porque se llega á una fuerza constante, bien determinada, que es la suma de las dos. Es por eso que yo estoy por esta legislación, en que, respetando al obrero, le reconozco su derecho y le privo al mismo tiempo que lesione derechos de los demás, porque esto no es regular ni justo.

No se nos puede culpar, señor Presidente, á los que pensamos que el artículo que he presentado es bueno, que hemos sido excesivos. No castigamos la huelga; establecemos simplemente que los huelguistas pierden el beneficio que esta ley les da. ¿Es ésa una pena? Será, señor Presidente; pero convengamos en dos cosas: que es una pena que se les aplica con razón, porque se ha hecho culpable al faltar al propósito principal de la ley que le dió esa ventaja; pero convengamos también en que al dictar este artículo somos menos severos que todas las naciones que han hecho legislación sobre estas cosas.

Este derecho de huelga se discute y se niega. No se nos puede, por consiguiente culpar. Son estos derechos tan discutidos y tan discutibles, se ha hablado tanto al rededor de este ejercicio de un derecho que, en resumen, es un derecho de fuerza, que por mucho que se aplique como *ultima ratio*, cuando ya no quedan medios humanos de obtener justicia, decía el señor Senador, es siempre un derecho tan grave porque afecta

los derechos de los demás, que, con razón, se ha trepidado mucho al definirlo.

¿Qué es una huelga? Yo he encontrado tantas definiciones, sin que ninguna me satisfaga por completo, que no sé qué creer. Se dice: es el derecho de no trabajar ó de no emplear su trabajo sino en ciertas condiciones. Para éso no se necesitan huelgas, porque la huelga no se concibe sino para el que está comprometido á un trabajo. Una vez comprometido, ¿ese derecho es cierto? Es lo que queda por averiguar. Se dice: es la cesación del servicio convenido por medio de un contrato con un empresario. Pero, en materia de ferrocarriles, la cesación del servicio es peor que el abandono completo del servicio. ¿Por qué? Primero, porque los perjuicios del paro son tan enormes como los perjuicios de la separación definitiva del trabajo; segundo, porque, por una de las características de la huelga, el huelguista deja el trabajo, pero no renuncia al puesto, de manera que crea esta situación, un poco violenta: ejerce el derecho, interrumpe el trabajo y obliga á la otra parte á volver á aceptar al que lo interrumpió, después de ocasionarle el perjuicio. Se dice también que es un medio de compulsión ejercido por una de las partes sobre la otra para obligarla á modificar una de las condiciones del contrato. Basta que se diga compulsión para que no pueda entrar dentro de mi concepto del derecho y de la razón y dentro del criterio que tengo de que es necesario encontrar una fórmula que resuelva estas dificultades.

La huelga no es una ruptura, creo que lo dijo Mr. Jaurés, es una suspensión de contrato de trabajo. Pero siempre estamos dentro de la misma petición de principios: ¿por qué para el huelguista, el contrato deja de ser contrato?; ¿por qué no existe más que para una sola parte?; ¿por qué él sólo resuelve cuando debe trabajar y cuando no debe trabajar, cuando debe cumplir ó dejar de cumplir el contrato? Por consiguiente, ante el derecho estricto y ante el más rudimentario sentido práctico, también esta definición es la definición de un absurdo.

Y no es malo que nos alarmemos un poco ante esta tendencia que quiere ha-



cernos aceptar el derecho de la huelga como un derecho sagrado y consagrado, ante las declaraciones de ciertos socialistas que han recorrido el mundo y han hecho doctrina; ante la doctrina de Marx de «no hay más derecho que el interés de su clase»; de la de Saurel: «la ley es la fuerza». Pero ¿cómo tenemos que mirar las demás estas teorías que llegan á perturbar todo y á sentar el principio de que no haya jamás un derecho posible sobre que establecer las bases de la sociedad, si es la fuerza la que ha de primar?

Indudablemente espantaba Bismark, cuando decía: «La fuerza supedita al derecho», pero más espanta uno de los jefes del Partido Socialista cuando le decía al mismo Bismark, en el Reichstag: «no se haga ilusiones, señor canciller; el día que nosotros triunfemos será el día de menor libertad, porque impondremos nuestra voluntad y nuestras leyes, como creemos que deben imponerse». Y es verdad, señor Presidente, entonces se ha de llegar hasta establecer en qué se ha de trabajar, en qué horas se debe reposar y cuando se debe aprovechar de ese mismo trabajo; entonces se llegará á un ideal de una colectividad en que encontraríamos esta enorme anomalía: que sería una colectividad ideal de hombres felices, pero, siendo cada uno de sus componentes hombres esclavos y desgraciados. Y bien, señor Presidente, hablando con la franqueza y con la claridad que, en estas circunstancias deben emplearse al discutir leyes de esta trascendencia, no puedo disimular mi impresión. Este artículo significa que, para los empleados de los ferrocarriles se crea una situación nueva, sí, pero perfectamente definida; se crea una situación en que se imponen obligaciones nuevas y se trata de hacerles la justicia de compensar el trabajo que van á desempeñar. Es necesario, pues, que este principio regule la situación entre empleados y empresas y los necesitados del servicio de los ferrocarriles.

Por eso he entendido siempre que era en este momento cuando la ley se debería dictar. Y puesto que de empleados de ferrocarriles se trata, yo quiero también aprovechar la ocasión, señor Presidente, de decirles una palabra que

ante muchos de ellos no tendrá la autoridad de la de los predicadores del socialismo, pero que ante muchos de ellos tendrá la autoridad de la de un hombre sincero y de buena fe.

Yo quiero recordarles, lo mismo que recordaba el señor Ministro de Obras Públicas, yo quiero recordarles como la práctica les demuestra diariamente que la prédica de comité, en el hecho, cae siempre en la imposibilidad de cumplirse.

El señor Ministro ha citado las palabras de Briand en la Cámara de Diputados de Francia en 1910, y bien, recuerden los obreros cómo el mismo Briand, que hubiera recurrido á la ilegalidad para salvar á la Francia, es el mismo Briand que en el Congreso socialista de 1899, decía: «La huelga presenta al militante esta ventaja, tiene esto de seductor: que es, en suma, el ejercicio de un derecho incontestable. Es una revolución que empieza en la legalidad, con la legalidad.»

Y bien, podía el señor Briand sostener este derecho en teoría, pero se los niega á los empleados de las empresas ferrocarrileras, como primer Ministro responsable. Pues bien, si esto se ha hecho en Australia, en Nueva Zelandia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica y con más rigor en Suiza, yo quiero decirles: piensen que ustedes son argentinos, que sirven un país cuyos intereses son para ustedes sagrados, piensen que la prédica exaltada y exagerada del comité siempre se quiebra en la práctica del gobierno, y tiene que suceder fatalmente así.

En materia de legislación, hay en el Evangelio, estímesese éste como se quiera, una gran enseñanza: para dictar las tablas de la ley es necesario subir á la cumbre del Sinaí. Hay que subir á la altura donde la atmósfera se serena, desde donde se domina todo el espectáculo de la Nación para apreciar sus necesidades y sus intereses; pues, señor Presidente, encerrados en el círculo estrecho de la prédica de comité, afanados por un interés de gremio, limitado siempre por justo que sea, no es posible ver la escena grandiosa de las necesidades, el concepto pujante de múltiples intereses que, concordantes, en-

gendran el progreso nacional. Por eso, cuando los hombres que han predicado en esos mismos comités, llegan á la cumbre del Sinaí, cuando ven que aparte de los intereses que han defendido siempre hay otros intereses más altos y más sagrados, si son hombres honrados, como Briand, dicen: y bien sacrifiquemos la prédica, rompamos los antecedentes personales, porque la patria es ante todo.

Y á propósito de patria, señor Presidente, recordemos que nuestros obreros tienen que estar en un medio en que el sentimiento de patria puede á veces debilitarse; que esos obreros viven en un medio cosmopolita, á veces internacionalista, que no es el más á propósito para cultivar este amor á la República que con tanto ardor cultivamos nosotros; y sin embargo, de la suerte de esta República depende la suerte de ellos y de sus hijos. Cuidar la prosperidad del país es cuidar su propio porvenir y es cuidar el de los que detrás de ellos vengan.

He dicho.

—Aplausos.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—Pido la palabra.

Un ilustre historiador, refiriéndose al descubrimiento de la ley de gravitación universal por Newton, dice que si este descubrimiento pudiera haber lesionado algún interés material, de seguro hubiera sido desconocido por el pensamiento de su época. Estas palabras de Macaulay, podríamos aplicarlas también al reconocimiento del derecho de huelga en las sociedades modernas; pero á la inversa, diciendo que si la proclamación de este derecho fuera de un simple carácter teórico, todo el mundo habría de reconocerlo; pero que en cuanto lesiona los intereses de un grupo social, la legislación levántase contra él para imponer un castigo ó una pena. Sin embargo, como la sociedad está en marcha y nadie podrá detenerla, ni aún con leyes de fuerza ó de coacción, las legislaciones modernas tienen que abrir sus artículos para reconocer este derecho, que es sagrado, y que continuará manteniéndose en las leyes de nuestra época, á pesar de

cualquier espíritu reaccionario, porque dependerá su mantenimiento de la organización y de la inteligencia del proletariado.

El señor Ministro de Obras Públicas admite, en principio, el reconocimiento de este derecho de coalición en cuanto puede ser ejercido por los trabajadores de las industrias privadas, si bien no lo reconoce para los trabajadores ocupados en los servicios públicos. Hacía así un desdoblamiento que no está de acuerdo con la lógica, ni está de acuerdo tampoco con la Carta fundamental de nuestro país. La Constitución Nacional, en efecto, no hace ninguna distinción entre aquellos derechos y garantías individuales que consagra y reconoce de una manera expresa, en cuanto pueden ser ejercidos por ciudadanos dedicados á una determinada actividad ó á otra determinada actividad social ó económica. Los derechos y garantías individuales, establecidos en la Constitución Nacional, son iguales para todos los habitantes del país; y no podría la lógica más casuística ni el criterio más arbitrario, cuando quiere interpretar con lealtad el espíritu y la letra de nuestra Constitución, negar que esos derechos y esas garantías individuales han sido establecidos por la Constitución para todos los habitantes de nuestra República. (*Aplausos en la barra.*)

Creo que el señor Ministro de Obras Públicas, está en ésto siguiendo las huellas de su antecesor, en cuanto el doctor Ramos Mexía llegó á afirmar en la Cámara de Diputados que sería necesario en algún momento restringir el derecho de coalición á los obreros. Pretende el señor Ministro apoyar sobre una base bien deleznable, por cierto, esta peregrina teoría de que los derechos individuales de asociación y de coalición, que están escritos en la Carta Fundamental de la República, no pueden de ninguna manera aplicarse á los trabajadores dedicados á un servicio público.

Decía el señor Ministro, para sostener semejante criterio, que en los servicios públicos, como en los transportes por tierra, están comprometidos los intereses generales del país; hablaba del tráfico de las mercancías, hablaba del correo, que son verdaderas necesidades sociales, y concluía diciendo, que en vir-

tud de ser indispensable mantener siempre el servicio para responder á la satisfacción de esas necesidades sociales. el Estado, el Gobierno, tenía el derecho de intervenir para obligar á los obreros á continuar en él. Pues bien; yo afirmo, que ni siquiera en virtud de este interés general, puede un gobierno ejercer una verdadera coacción sobre un individuo que goza de un derecho fundamental, inherente á su propia naturaleza, el de cruzarse de brazos cuando así le convenga á su salud, á sus intereses, á su labor y á su vida.

Es cierto que en este caso, señor Ministro, pueden estar comprometidos los intereses generales del país; pero yo le aseguro al representante del Poder Ejecutivo, que, cuando un Gobierno tiene conciencia de su derecho; que cuando un Gobierno sabe responder á las necesidades del país; que cuando un Gobierno es nacido y consagrado por el sufragio universal de una República, encuentra medios, dentro de la ley y del derecho, medios legales suficientes para obligar á los poderosos á que cumplan con su deber, de manera que estas necesidades sociales no dejen de ser satisfechas en ningún instante!!

Pero resulta que nosotros tenemos un Gobierno de clase, porque no ha nacido del sufragio universal; tenemos un Poder Ejecutivo que se preocupa del interés de los poderosos, pero jamás del interés de los humildes! Ahí está el ejemplo de la huelga ferrocarrilera de 1911, en que hubo una parcialidad manifiesta, una parcialidad absoluta de parte del Poder Ejecutivo para con las empresas ferroviarias, de tal manera, que, en vez de seguir el ejemplo del gobierno inglés, cuando ocurrió una huelga análoga, vino el Poder Ejecutivo, por intermedio de su Ministro de Obras Públicas, á consentir que las empresas, amenazando las vidas de los pasajeros, pudieran colocar en las locomotoras á hombres que no tenían conocimientos técnicos para conducirlos. Esta es la parcialidad del Poder Ejecutivo en nuestro país, solícito de los intereses de las empresas, pero nunca de los intereses del pueblo trabajador!! El Poder Ejecutivo tiene en sus manos, porque lo reconoce la ley, el medio razonable para evitar que las empresas cumplan siempre con su deber,

para que las empresas no suspendan en ningún momento sus servicios!!

¡Qué diferencia, señor Presidente, entre la conducta de nuestro Gobierno y la conducta del gobierno inglés, durante la huelga ferrocarrilera! En los primeros incidentes de la huelga de 1911, producida entre nosotros, el Poder Ejecutivo no tomó ninguna intervención, si no fuera para favorecer á las empresas, para darles esperanzas de que en caso de producirse el movimiento de los ferroviarios, todo el poder del Gobierno, toda la presión legal estaría de parte de ellas, en contra de los trabajadores! ¿Y qué hizo el gobierno inglés cuando ocurrió una huelga semejante? En el acto, Mr. Asquith acudió ante los representantes de los obreros y de las empresas para invitarlos á una reunión amigable, y el ministro de comercio ocurrió también ante los representantes de ambas partes para invitarlos á una conciliación. Fué de esta manera, cómo, por el nombramiento de una comisión real, el gobierno inglés llegó á resolver, sin necesidad de recurrir á la arbitrariedad y á la fuerza, uno de los problemas más graves que habían afectado la vitalidad de la nación inglesa! Es porque en Inglaterra, según escribe Dicey, la libertad más bien que en las leyes está escrita en las costumbres!

En consecuencia, señor Presidente, si el Poder Ejecutivo pensara de una manera imparcial y serena en defender los intereses sacrosantos de la Nación, siempre habría de encontrar la solución legal para resolver estos conflictos entre el capital y el trabajo en cuanto afectara á los intereses públicos.

Pero tan no tiene argumentos bastantes el señor Ministro de Obras Públicas para sostener su arbitraria teoría, su extraño criterio, que para justificarlo nos colocaba fuera de la ley, trayéndonos el ejemplo de una situación de guerra. ¿No sabemos todos nosotros que la Constitución Nacional no rige en estado de guerra, y, que los recursos, los derechos y garantías deben estar supeditados en ese caso á las supremas necesidades del pueblo, á las supremas necesidades de la defensa nacional? Entonces no corresponde, señor Presidente, traer este argumento del estado de guerra para

sostener que las medidas que pudieran justificarse en ese momento para la militarización del país pueden aplicarse en estado de paz, cuando juegan libremente todos los resortes constitucionales.

Comprendía, es cierto, el señor Ministro de Obras Públicas, que estaba fuera de la lógica y la verdad constitucional, cuando, para apoyar mejor sus teorías, recurría á la ley de ferrocarriles, afirmando que el artículo 84 podía aplicarse en el caso de suspensión de trabajo por parte de los obreros ferroviarios. Pues bien, señor Presidente, estoy, en este punto, en una situación diametralmente opuesta á aquella en que se ha colocado el señor Ministro de Obras Públicas. Ni la letra ni el espíritu del mencionado artículo autoriza interpretar de esa manera la ley de ferrocarriles. Castiga, ese artículo, con prisión ó con multa á los mecánicos, conductores ó demás empleados que abandonan sus puestos, pero que los abandonan durante el servicio; y el reglamento general de ferrocarriles, en una de sus disposiciones, viene á completar este artículo de la ley; de modo que debe entenderse que no se castiga el hecho de que el obrero resuelva suspender el contrato de trabajo, sino la circunstancia de que, conduciendo, por ejemplo, un maquinista una locomotora, la abandone en la mitad del camino, porque el maquinista tiene la obligación de llegar al punto de destino. Esta es la pena que establece el artículo 84 de la ley de ferrocarriles; pero en ninguna forma este artículo castiga el derecho de huelga, que es inalienable é inviolable.

**Sr. Ministro de Obras Públicas—**¿Y dónde está la disposición análoga para las demás industrias?

**Sr. Del Valle Iberlucea—**La disposición análoga para las demás industrias no necesita estar escrita en ninguna ley desde el momento que está reconocida en la Constitución. El derecho de huelga nace del derecho de asociación; estos dos derechos están íntimamente vinculados y reconocer, como lo hacía el Ministro, á los obreros ferroviarios el derecho de asociarse con fines útiles, y no reconocerles el derecho de huelga, es negar la realidad práctica del primero, porque: para qué van á asociarse los

obreros sino es para reclamar medidas que contribuyan á su mejoramiento? El derecho de huelga no necesita ser reconocido expresamente, y la prueba está en que cuando en alguna nación se ha desconocido y castigado, era indispensable dictar una serie de medidas penales, como ha sucedido en Inglaterra, en Francia y en otros países.

Creo haber demostrado que la obstrucción del Ministro, como la del señor Senador por Entre Ríos, no puede apoyarse en la citada disposición de la ley de Ferrocarriles. De manera que no hay ningún antecedente nacional que autorice á incluir esta represión indirecta del ejercicio del derecho de huelga, en una ley de pensiones y retiros. Pero tanto uno como otro nos han traído ejemplos de afuera, de países socialistas según ellos. Cuando nosotros desde esta banca de oposición traemos el ejemplo y la experiencia extranjeros, hay siempre un argumento de carácter nacionalista, para decirnos que no necesitamos ese ejemplo ni esa experiencia; que nosotros nos bastamos á nosotros mismos: cuando, por el contrario, en vez del reconocimiento de derechos explícitos, inherentes al hombre, tratase de incorporar medidas represivas á la legislación, ¡entonces sí, está bien el ejemplo extranjero! ¡está bien la experiencia y la cita de países extranjeros!

Empezaba el señor Ministro, por hablarlos de una legislación igual á la proyectada en el sentido de reprimir las huelgas de obreros ferroviarios, que existe en países de gobierno socialista. Yo debo manifestar, desde luego, que en los países que él recordaba jamás ha existido un gobierno socialista. En las colonias inglesas de Australasia hay una organización política del proletariado, de la clase trabajadora, si disgusta aquella palabra, y el partido del trabajo que ha tenido la mayoría en el Parlamento de esas colonias, en algún momento ha llegado también al gobierno. Pero los gobiernos surgidos de la fuerza política de la clase trabajadora en Australasia, no eran propiamente gobiernos socialistas: se practicaba allí lo que algunos han llamado el *socialismo sin doctrina*, cosa bien distinta del socialismo democrático.

Sin embargo, debemos reconocer que los partidos obreros de dichas colonias han realizado una legislación bien avanzada, digna de ser imitada. Cuando el Ministro de Obras Públicas nos citaba las leyes de Nueva Zelandia y Victoria, que castigaba la una la huelga de los empleados ferroviarios, y retiraba la otra á los mismos el derecho de pensión en los casos de suspender el servicio, debiera, como representante del Poder Ejecutivo, haber ido más lejos, en el sentido de reclamar para nuestro país, como impuestas por nuestro progreso social y económico, instituciones análogas á las que existen en aquellas colonias, donde, según el mismo señor Ministro lo recordaba, hay una ley de arbitraje obligatorio, que es aplicable para obreros y patrones, y la cual, si bien es cierto que ha sido resistida por algunos gremios obreros, de tendencias socialistas, por regla general, no ha sido resistida por la mayoría de las corporaciones obreras.

Habrà de tener en cuenta el señor Ministro de Obras Públicas que las deficiencias de la primera ley estableciendo el arbitraje obligatorio en Nueva Zelandia, han sido subsanadas por leyes ulteriores. Ahora podemos decir que las clases trabajadoras de esa colonia inglesa tienden á incorporar, en las prácticas y las costumbres, el principio del arbitraje obligatorio; y refiriéndome de una manera especial á la política ferroviaria, que tanto debe interesar al señor Ministro de Obras Públicas, debería él tener presente que si en Nueva Zelandia, como en Victoria, la ley había adoptado tales disposiciones, era porque necesitaban los gobiernos salvaguardar los intereses nacionales. En efecto, en esos países, los ferrocarriles, por regla general,—las excepciones son muy limitadas,—son de propiedad de la nación, y el Estado tiene entonces necesidad de buscar medios para evitar que los obreros y empleados puedan perjudicarlo, y por esta razón es que en Nueva Zelandia y en Victoria ha llegado á tomarse una medida restrictiva respecto del ejercicio de la huelga.

Pero en nuestro país no existe nada semejante. Es cierto que tenemos algunos ferrocarriles de propiedad del Estado; pero esta ley, como lo ha resuelto

la honorable Cámara, no será aplicada para los obreros que prestan sus servicios en los ferrocarriles del Estado, sino para los obreros de las empresas particulares. Además—y es necesario elevar un poco el debate—las condiciones políticas de Australia y de Nueva Zelandia son bastante distintas de nuestras condiciones políticas.

Es verdad que hemos empezado á vivir una nueva era constitucional; es verdad que, por lo menos en algunas regiones del país, el sufragio universal ha empezado á ser una realidad; pero no es menos cierto, también, que todavía, en toda la extensión de nuestra República no existe, en la práctica, la libertad del sufragio garantida suficientemente por los Poderes Públicos. Mientras nosotros no tengamos un gobierno que haya surgido realmente del sufragio universal, no debemos darle, por medio de la ley, facultades arbitrarias, porque esos gobiernos no habrán de tener las responsabilidades propias, que nacen cuando los Poderes Públicos han surgido de una manera pura é inmaculada.

Pero el señor Ministro nos hablaba también de los Estados Unidos, y nos citaba una sentencia de sus tribunales, de la que habla Jhonson en su «American Railway Transportation». En 1894, prodújose la huelga de que hablaba el señor Ministro de Obras Públicas, que dió lugar á varias sentencias de los tribunales de la República, los cuales, de esta manera, se colocaban del lado de la clase dominante frente á la clase productora. Yo debo afirmar que, aun en los Estados Unidos, la justicia suele ser á veces una justicia de clase, y que los tribunales, como decía Tolstoi, no son, en muchos casos, la representación de la justicia.

Ahora bien, prescindiendo de las medidas de fuerza adoptadas en los Estados Unidos para reprimir esa huelga, debo recordar al señor Ministro que, con posterioridad, aprovechando la experiencia y notando el profundo disgusto que las *injuncions* habían despertado en los elementos trabajadores, el gobierno federal dictó una ley nacional de arbitraje. Ocurrió esto en el año 1898. En consecuencia, en los Estados

Unidos, donde no hay ninguna disposición legal que castigue el ejercicio de la huelga, hay en cambio una ley de carácter federal que somete al arbitraje facultativo los conflictos que puedan suscitarse entre las empresas y los obreros ferroviarios.

Para que se vea cómo el arbitraje es un medio de solucionar estos conflictos y ha dado buenos resultados, diré que tengo aquí un número del «Boletín de la oficina del trabajo de Francia», en cuya publicación se dice que las diferencias sometidas á los mediadores varían en importancia, y comprenden desde conflictos que corresponden á redes ferroviarias menores de cien millas y de cien empleados, hasta conflictos de más de cien mil millas de vías férreas y más de cuarenta mil empleados. También se publica en esta revista una estadística, que comprende desde el año 1899 á 1911, en la que se contienen las demandas formuladas por las compañías y los empleados para someter al arbitraje voluntario los conflictos planteados entre los obreros y las empresas.

No quiero fatigar la atención de los señores Senadores con la lectura de esta estadística; pero sí voy á decir que, sobre cuarenta y ocho conflictos que se iniciaron, doce han sido sometidos al arbitraje; dos en 1907, con dos mil ochocientos cincuenta empleados; dos en 1909, con 1480 empleados; y siete en 1910, con cuarenta y seis mil novecientos veinte empleados; y en todos estos conflictos, sometidos al arbitraje, las sentencias fueron respetadas por las dos partes, salvo ligeras interpretaciones sobre puntos de detalle.

Quiere decir, en consecuencia, que en países modernos, como en Nueva Zelanda y Australia, se tiende á someter estos conflictos á un arbitraje obligatorio, y en otros, como en los Estados Unidos al arbitraje voluntario; y, aun debe saber el señor Ministro, que hace pocos años fué dictada en el Canadá una ley á propósito del arbitraje obligatorio de los caminos de hierro.

En la *Revue Politique Parlementaire* del 22 de Marzo de 1911, dice Lemieux que esta ley se limita á erigir en delito y á castigarlo, en consecuencia, el he-

cho de declarar la huelga ó el *lock-out* en las industrias de utilidad pública y durante el examen del conflicto por el *bureau* arbitral, pero la ley no impone ningún carácter obligatorio á la sentencia arbitral y la huelga queda permitida cuando esta sentencia ha sido dictada. En el Canadá resulta, entonces, que es obligatoria la continuación del trabajo, mientras una comisión especial estudia el conflicto producido entre los obreros y las empresas; pero unos y otras quedan en libertad de acción una vez que es conocido este fallo. Es un término medio entre el arbitraje obligatorio de Nueva Zelanda y Australia y el arbitraje voluntario de los Estados Unidos; y debe tenerse en cuenta, además, que en esta ley del Canadá no sólo se hace referencia á la huelga de los obreros, sino á los *lock-outs* de las empresas.

Ahora, el artículo propuesto por el señor Senador por Entre Ríos se refiere á los obreros que abandonan, voluntariamente, el servicio, pero no se refiere á las empresas que despiden á los obreros, y esto, lo he dicho anteriormente, constituye una situación de desequilibrio entre los obreros y las empresas. Si el señor Ministro de Obras Públicas, partidario como es de retirar el beneficio de la pensión á los obreros declarados en huelga, partidario como es de erigir á ésta en delito cuando se trata de servicios públicos, piensa de esta manera, colocándose del lado de las empresas, ¿por qué no piensa en los intereses de los obreros? ¿qué medios pondría en práctica el Gobierno de nuestra Nación para hacer que las empresas dieran satisfacción á las reclamaciones justas, razonables y necesarias de los trabajadores ferroviarios? ¿qué medios pondría en práctica el señor Ministro de Obras Públicas?..

Bien, señor Presidente; todo ésto demuestra que la situación es completamente parcial y favorable para las empresas ferroviarias, aun cuando esta parcialidad pretende ser encubierta con una bandera simpática, con la bandera del interés de la producción nacional. Y no me he de referir al ejemplo de Italia y de Alemania, donde los obreros ferroviarios están militarizados, de tal suerte, que en estas naciones no se les pue-

Septiembre 6 de 1913

CAMARA DE SENADORES

43.ª sesión ordinaria

den aplicar las disposiciones de una ley eminentemente civil, como es ésta de pensiones y retiros, que quiere dár el honorable Congreso de nuestro país.

Debo ahora referirme á la parte del discurso del señor Ministro de Obras Públicas en que justificaba la actitud de Briand, de este hombre público francés, dotado de una prodigiosa elocuencia y de una habilidad política extraordinaria que, en cierto momento oportuno, saltó del otro lado de la barricada. El señor Briand representó en Francia, en algún momento, una tendencia de reacción contra los principios democráticos y sociales de la tercera república; empezó de una manera bien revolucionaria su carrera política, en verdad, como lo reconocía el señor Senador por Entre Ríos; pero yo no atribuyo á la experiencia que este hombre político adquirió en el gobierno el concepto que tuvo en él de la responsabilidad gubernativa, su cambio de ideas y de opiniones en materia social y política. Dotado de una gran ambición, quiso escalar las primeras posiciones políticas de su país. En esto pude de encontrarse la explicación de que el defensor del antimilitarista Hervé, llegara á encarnar los principios del nacionalismo, que combatió la voluntad democrática de la gloriosa república francesa.

Recordaba el señor Ministro de Obras Públicas las palabras pronunciadas por Briand en 1910; recordaba que saliendo de la legalidad, como había salido antes también Clemenceau, para combatir la huelga de los ferroviarios, había militarizado á estos empleados, invocando el interés supremo del pueblo, la salud pública; pero el señor Ministro no nos recordó que este mismo estadista pensó en estatuir para lo sucesivo tribunales de conciliación y de arbitraje que resolvieran los conflictos del trabajo y de las empresas ferroviarias. En efecto, en el año 1910, presentó un proyecto en ese sentido á la Cámara de Diputados, un proyecto de estatuto de los funcionarios, y tal vez en su exposición de motivos haya encontrado el señor Ministro de Obras Públicas algunos antecedentes relativos á la represión en los países modernos, del derecho de huelga, cuando es ejercido por los obre-

ros empleados en los servicios públicos.

Sin embargo, este proyecto no ha sido convertido en ley, porque, de aprobarlo, la República hubiera desconocido su tradición democrática, ¡aquella tradición que había venido encarnándose durante décadas, en hombres que afrontaron todo género de sufrimientos y de persecuciones para llegar al régimen de la libertad y de la democracia! En los albores de la Revolución, un elocuentísimo tribuno del pueblo había alzado su voz en los estados de Provenza, para defender á los obreros: dirigiéndose á los representantes del clero y de la nobleza. Mirabeau les increpaba, diciéndoles: «¡Tened cuidado, señores! no desdeñéis á ese pueblo que lo produce todo, á ese pueblo que para ser formidable, le bastaría permanecer inmóvil!»

La República Francesa no ha querido hacerse solidaria con la política reaccionaria de Clemenceau y Briand, y no ha llegado á sancionar ese proyecto de estatuto de los funcionarios, y, por el contrario, el grupo socialista en la Cámara de Diputados, presentó un contraproyecto, en el cual estaba reconocida de una manera explícita el derecho de los funcionarios para contratar con los poderes públicos todo aquello que se refiere á las relaciones del trabajo. De manera, pues, que por este contraproyecto de la representación socialista, inspirado en las nociones del nuevo derecho, llegábase á admitir el principio de que he hablado antes, el principio del contrato colectivo del trabajo, dándose personería, para celebrarlo, á los funcionarios del Estado. En esta forma entendía la diputación socialista que podrían resolverse los conflictos planteados entre el capital y el trabajo, cuando se refiriesen á los servicios del Estado.

—Aplausos en la barra.

Y pasando ahora, señor Presidente, al discurso del señor Senador por Entre Ríos, debo manifestar que en mi opinión...

**Sr. Presidente**—Debo hacer presente al señor Senador que quizá conviniera postergar esa parte de su discurso para

Septiembre 6 de 1913

CAMARA DE SENADORES

43.ª sesión ordinaria

la próxima sesión, porque la Secretaría me informa que la Cámara ha quedado sin número.

**Sr. Del Valle Iberlucea**—No tengo inconveniente.

**Sr. Presidente**—Invito á la Cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Eran las 7 p. m.

DOMINGO DESPLATS,  
Subdirector de Taquígrafos.